

**CONTESTACION DEMANDA 11001310500120220048900 de BARBARA ROCIO CALA ACEVEDO - CC 51750556 REPARTO 2366**

notificaciones@taborabogados.com <notificaciones@taborabogados.com>


Mar 27/06/2023 3:07 PM

Para: Juzgado 01 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C.

<jlato01@cendoj.ramajudicial.gov.co>; bcalaa@hotmail.com

<bcalaa@hotmail.com>; wittacosta2006@hotmail.com <wittacosta2006@hotmail.com>; Buzon ProcesosJudiciales <procesosjudiciales@colfondos.com.co>

CC: vmejia@taborabogados.com <vmejia@taborabogados.com>; 'TABOR ABOGADOS COORDINACION' <taborcoordinacion@gmail.com>; gerencia@taborabogados.com <gerencia@taborabogados.com>; azamudio@taborabogados.com <azamudio@taborabogados.com>

 1 archivos adjuntos (9 MB)

RADICACION CONTESTACION DEMANDA 11001310500120220048900 BARBARA ROCIO CALA ACEVEDO - CC 51750556.pdf;

**Señores**

**JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.**

**E. S. D.**

**REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL PRIMERA INSTANCIA**  
**DEMANDANTE: BARBARA ROCIO CALA ACEVEDO - CC 51750556**  
**DEMANDADO: Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES**  
**RADICACIÓN: 11001310500120220048900**

De la manera más atenta, y dentro de los términos procesales oportunos nos permitimos remitir la contestación dentro del proceso de la referencia, junto con el poder de sustitución, copia de la escritura pública relacionado dentro del acervo probatorio del cuerpo de la contestación de la demanda.

Así mismo, me permito indicar que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 2213 de 2022, simultáneamente se efectuó envío de la contestación de la demanda con sus respectivas pruebas y anexos, a la dirección de correo electrónico indicada por la parte demandante en el libelo introductorio de demanda para efectos de notificaciones, esto es al correo electrónico del apoderado:

DEMANDANTE : [bcalaa@hotmail.com](mailto:bcalaa@hotmail.com)

APODERADO DEMANDANTE : [wittacosta2006@hotmail.com](mailto:wittacosta2006@hotmail.com)

DEMANDADA COLFONDOS: [procesosjudiciales@colfondos.com.co](mailto:procesosjudiciales@colfondos.com.co)

El expediente administrativo de la hoy demandante se allegara en cd por cuanto es muy pesado

Solicitamos que a la vuelta de este correo nos acuse su recibo.

Respetuosamente,





2023\_9447273

Señor

**JUZGADO (1º) LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ – DISTRITO CAPITAL.**

**E. S. D.**

**REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA**  
**RADICACIÓN: 11001310500120220048900**  
**DEMANDANTE: BARBARA ROCIO CALA ACEVEDO C.C. No. 51750556**  
**DEMANDADOS: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES**  
**COLPENSIONES**  
**AFP COLFONDOS S.A.**

**ASUNTO: PODER ESPECIAL**

**MARIA CAMILA RIOS OLIVEROS**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.026.275.391 de Bogotá D.C., en mi calidad de representante legal de la firma **TABOR ASESORES LEGALES SAS**, bajo el NIT 900.442.223-7 sociedad con domicilio principal la ciudad de Bogotá constituida mediante documento privado 1/06/2011 inscrito en el libro de Cámara y Comercio del 07/06/2011 con No. 01485654 del libro XI, actuando en nombre y representación de la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones para realizar las actuaciones necesarias para la defensa jurídica de esta Entidad dentro del proceso del asunto, mediante poder general otorgado por la escritura pública No. 1186 del 17 de mayo de 2023 de la Notaria Segunda (02) del Circulo de Bogotá.

A su vez, manifiesto que a través del presente escrito SUSTITUYO poder a la abogada **AMANDA LUCIA ZAMUDIO VELA**, igualmente mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.713.048 expedida en Bogotá (Cundinamarca) y portadora de la Tarjeta Profesional No.67.612 del Honorable C.S. de la J., para que realice la defensa y continúe con el debido proceso para que ejerza la defensa jurídica en los intereses de Colpensiones.

En consecuencia, sírvase reconocer personería a la mencionada abogada, en los términos del presente mandato.

Renuncio a término de notificación y ejecutoria del auto favorable.

De usted, respetuosamente,

Acepto;

**MARIA CAMILA RIOS OLIVEROS**  
**C.C. No. 1.026.275.391 de Bogotá**  
**T.P. No. 272.749 del C. S. J.**

**AMANDA LUCIA ZAMUDIO VELA**  
**C.C. 51.713.048 de Bogotá**  
**T.P. 67.612 del C.S. de J.**



Señor

**JUZGADO (1º) LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ – DISTRITO CAPITAL.**

**E. S. D.**

**REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA**  
**RADICACIÓN: 11001310500120220048900**  
**DEMANDANTE: BARBARA ROCIO CALA ACEVEDO C.C. No. 51750556**  
**DEMANDADOS: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES**  
**COLPENSIONES**  
**AFP COLFONDOS S.A.**

**ASUNTO: CONTESTACIÓN DE DEMANDA**

**AMANDA LUCIA ZAMUDIO VELA**, abogada en ejercicio, debidamente identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de apoderada judicial sustituta de la Administradora Colombiana de Pensiones - en adelante COLPENSIONES - cordialmente solicito al Despacho reconocerme personería para actuar de acuerdo con la sustitución de poder otorgado por la doctora **MARIA CAMILA RIOS OLIVEROS**, en su calidad de apoderada principal de la entidad demandada, tal y como consta en el poder adjunto y estando dentro del término de la oportunidad procesal, de manera respetuosa me permito dar contestación a la demanda propuesta dentro del proceso de la referencia instaurado contra mi representada, para que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, se absuelva a mi representada de todas y cada una de las pretensiones propuestas en la demanda y se condene en costas a la parte demandante.

**1. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD DEMANDADA,**  
**REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO**

La Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- es una empresa industrial y comercial del estado del orden nacional, organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005 modificadorio del artículo 48 de la constitución Política, de acuerdo con lo que establezca la ley que los desarrolle. La representación legal la ejerce el doctor **JAIME DUSSAN CALDERON**.

El domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., en la **Carrera 10 No. 72-33 Torre B piso 11, número telefónico 2170100**.

**2. PRONUNCIAMIENTO EXPRESO FRENTE A LOS**  
**HECHOS DE LA DEMANDA**

De conformidad con lo preceptuado en el numeral 3 del artículo 31 del CPT y de la SS, me permito pronunciarme respecto a los hechos de la siguiente manera, con el fin de que se





fije el litigio en cada uno de ellos, atendiendo a la naturaleza jurídica de la entidad y a que los hechos que se tomen como ciertos no constituye prueba de confesión<sup>1</sup>

**AL HECHO PRIMERO: ES CIERTO** la señora BARBARA ROCIO CALA ACEVEDO, nació en la ciudad de Bogotá D.C., el tres (03) diciembre del año 1963, tal como consta en su cédula de ciudadanía la cual se encuentra en el expediente administrativo

**AL HECHO SEGUNDO: NO ME CONSTA** que comenzó a cotizar para pensión desde el mes de mayo del año 1990, lo cual para la fecha continúa haciendo, toda vez que corresponde a situaciones ajenas a mí representada, con relación a las circunstancias particulares del momento y adicionalmente son situaciones que debe probar la demandante durante el proceso.

**AL HECHO TERCERO: NO ME CONSTA** que a partir del mes de mayo del año 1990, inició a cotizar su pensión ante el extinto ISS, y desde el mes de junio de año 1995 cotizó en COLFONDOS S. A. PENSIONES Y CESANTÍAS, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en consecuencia deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P, pues le compete a la parte que alega un supuesto factico probar el mismo, lo cual no puede verificarse sino aduciendo la prueba plena del caso.

**AL HECHO CUARTO: NO ME CONSTA** que de acuerdo a la historia laboral expedida el 19 de enero del año 2022, proferida por COLFONDOS S. A. PENSIONES Y CESANTÍAS, hasta el mes de enero del 2022, tiene un total de 1.640.0 semanas incluyendo todo los regímenes a los que cotizó para el derecho a la pensión de vejez , toda vez que corresponde a situaciones ajenas a mí representada, con relación a las circunstancias particulares del momento y adicionalmente son situaciones que debe probar la demandante durante el proceso.

**AL HECHO QUINTO: NO ME CONSTA** que el promotor en representación de COLFONDOS S. A. PENSIONES Y CESANTÍAS, que prestó el servicio de asesoría al momento de requerir el traslado de Régimen de mi representada, contrarió lo que le es legalmente exigible, no suministró la información suficiente para garantizar el derecho de la afiliada a la toma correcta de la decisión de selección de Régimen Pensional , toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en consecuencia deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P, pues le compete a la parte que alega un supuesto factico probar el mismo, lo cual no puede verificarse sino aduciendo la prueba plena del caso.

**AL HECHO SEXTO: NO ME CONSTA** que COLFONDOS S. A. PENSIONES Y CESANTÍAS, al momento de requerir el traslado de Régimen, no efectuó, ni presentó proyecciones del monto de la Pensión que le correspondería a la señora BARBARA ROCIO CALA ACEVEDO, según la normatividad del Régimen de Ahorro Individual , toda vez que corresponde a situaciones ajenas a mí representada, con relación a las circunstancias particulares del momento y adicionalmente son situaciones que debe probar la demandante durante el proceso.

**AL HECHO SEPTIMO: NO ME CONSTA** que COLFONDOS S. A. PENSIONES Y CESANTÍAS, tampoco brindó a través de sus promotores, información idónea, debidamente sustentada, respecto a las ventajas y desventajas que se podrían originar por el traslado de Régimen Pensional , toda vez que es un hecho ajeno a mi representada

<sup>1</sup> C.G.P Artículo 195. Declaraciones de los representantes de personas jurídicas de derecho público. No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas.

y en consecuencia deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P, pues le compete a la parte que alega un supuesto factico probar el mismo, lo cual no puede verificarse sino aduciendo la prueba plena del caso.

**AL HECHO OCTAVO: NO ME CONSTA** Durante el tiempo de afiliación de la señora BARBARA ROCIO CALA ACEVEDO, no ha recibido por parte de la demandada COLFONDOS SA. PENSIONES Y CESANTÍAS en ejercicio de sus deberes que tienen como Administradoras de dar permanente asesorías a la afiliada, ninguna clase de información relacionada con su expectativa pensional, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en consecuencia deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P, pues le compete a la parte que alega un supuesto factico probar el mismo, lo cual no puede verificarse sino aduciendo la prueba plena del caso.

**AL HECHO NOVENO: NO ME CONSTA** que la demandada COLFONDOS S. A. PENSIONES Y CESANTÍAS, omitió informarle oportunamente y con los debidos fundamentos de hecho y de derecho a la señora BARBARA ROCIO CALA ACEVEDO, antes del cumplimiento de sus 52 años de edad, que podría tomar la determinación de trasladarse al Régimen de Prima Media sin ningún impedimento legal, por resultarle favorable , toda vez que corresponde a situaciones ajenas a mí representada, con relación a las circunstancias particulares del momento y adicionalmente son situaciones que debe probar la demandante durante el proceso.

**AL HECHO DECIMO: NO ME CONSTA** que actualmente, la accionante devenga un salario de DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. (\$2.529.710oo), sin embargo la demandada COLFONDOS S. A. PENSIONES Y CESANTÍAS, le proyecta una mesa pensional por el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente que alcanza el valor de UN MILLON DE PESOS MICTE. (\$1.000.000,oo), tal y como se evidencia en las pruebas documentales adjuntas, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en consecuencia deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P, pues le compete a la parte que alega un supuesto factico probar el mismo, lo cual no puede verificarse sino aduciendo la prueba plena del caso.

### **3. HECHOS FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO DE LA DEFENSA**

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda respecto de mi representada, las cuales carecen de fundamentos legales y en consecuencia solicito se absuelva a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** de todos y cada uno de los cargos que en su contra se formulan, por las siguientes razones:

El problema jurídico radica en establecer si le asiste derecho a la señora **BARBARA ROCIO CALA ACEVEDO** a que se declare la nulidad y/o ineficacia de traslado de régimen pensional efectuado ante el RAIS

Es menester precisar que la señora **BARBARA ROCIO CALA ACEVEDO**, nació el **3 de Diciembre de 1963**, por lo que a la fecha de entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, esto es, al 1º de abril de 1994 contaba con **30 años**, de lo que se concluye que la demandante no contaba con el requisito de edad, ni las semanas cotizadas para ser beneficiaria del régimen de transición.

Por otro lado, para el **3 de febrero de 2022**, fecha en la cual solicitó ante Colpensiones su traslado, contaba con **58 años**, esto es, cuando se encontraba dentro de una prohibición legal, que se describe a continuación.

Al respecto, conforme al 2 de la Ley 797 de 2003, la cual modificó el artículo 13 de la Ley 100 de 1993: “después de un (1) año de vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión”, y tampoco cumple los requisitos señalados en las sentencias SU-062 de 2010 y SU-130 de 2013.

También se observa que la demandante no hizo uso de los derechos de los afiliados, esto es, el retracto, el cual le da al afiliado la posibilidad de dejar sin efecto su elección, ya sea del régimen pensional o de administradora dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual aquél haya manifestado por escrito la correspondiente selección.

De otro lado, es pertinente manifestar que al momento de la afiliación al RAÍS se encontraba frente a una mera expectativa, pues tal como se desprende los hechos y de las pruebas documentales, para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1º de abril de 1994 la demandante contaba con 30 años y no tenía el requisito de las semanas o tiempo de servicio, para poder regresar al RPM en cualquier tiempo.

Frente al tópico de las expectativas legítimas la Corte Constitucional en las sentencias C-789 de 2002 denominó sobre la existencia de una posición jurídica llamada expectativa legítima que otorga a sus beneficiarios una particular protección frente a cambios normativos que menos cavan las fundadas aspiraciones que están próximos a reunir los requisitos de reconocimiento de un derecho subjetivo, en esta sentencia la Corte Constitucional puntualizó que:

“El establecimiento de regímenes de transición representa uno de los instrumentos de salvaguarda de las expectativas legítimas, pues no resulta constitucionalmente admisible que una persona que ha desplegado un importante esfuerzo en la consecución de un derecho y se encuentra próxima a pensionarse vea afectada su posición de forma abrupta o desproporcional” Específicamente creó “la creación de un régimen de transición constituye entonces un mecanismo de protección para que los cambios producidos por transito legislativo no afecten desmesuradamente a quienes si bien no han adquirido el derecho a la pensión por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima para adquirir ese derecho por estar próximos a cumplir los requisitos para pensionarse en el momento del tránsito legislativo”

También en la sentencia T-832A de 2013, se explicó:

“Las expectativas legítimas se ubican en una posición intermedia entre las meras expectativas y los derechos adquiridos, las tres figuras hacen alusión a la posición fáctica y jurídica concreta en que podría encontrarse un sujeto frente a un derecho subjetivo. Una persona tiene un DERECHO ADQUIRIDO cuando ha cumplido la totalidad de los requisitos exigidos para el reconocimiento del mismo, estará ante una MERA EXPECTATIVA cuando no reúna ninguno de los presupuestos de acceso a la prestación y tendrá una EXPECTATIVA LEGITIMA, un derecho eventual cuando logre consolidar una situación fáctica y jurídica concreta en virtud de la satisfacción de alguno de los requisitos relevantes del reconocimiento del derecho subjetivo”

De otro lado, la Jurisprudencia de esta corporación ha señalado que:

1. Las meras expectativas carecen de amparo en la resolución de casos concretos.
2. Los derechos adquiridos gozan de una poderosa salvaguarda por haber ingresado al patrimonio del titular, y
3. Las expectativas legítimas son merecedoras de una protección intermedia atendiendo a los factores relevantes del asunto específico y los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

De igual manera, por:

- 1-. Por no reunir los requisitos legales para regresar al régimen de prima media con prestación definida.

La demandante no está amparada por el régimen de transición y por tanto no puede regresar al régimen de prima media con prestación definida en cualquier tiempo, debió hacerlo cuando le faltaran menos de 10 años para cumplir con el requisito de la edad para adquirir su derecho a la pensión, pero como la solicitud la elevo cuando tenía 60 años, es decir cuando ya superaba la edad para reclamar su derecho pensional, por ende ya no puede regresar al régimen administrado por COLPENSIONES.

En caso de que deseen retornar al régimen de prima media, por considerar que les resulta más favorable a sus expectativas de pensión, no podrán hacerlo si les faltan 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, en virtud la exequibilidad condicionada del artículo 13 de la ley 100 de 1993, declarada en la sentencia C-1024 del 2004. (Corte Constitucional, sentencia SU -130, Mar. 13/13, Gabriel Eduardo Mendoza).

- 2-. Por no adolecer la afiliación de causal de nulidad.

El artículo 1508 del Código Civil dispone que los vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo.

En sentido estricto, el error se puede definir diciendo que es la falsa noción de la realidad o en la discrepancia entre una idea y la realidad que esta pretende representar y por tanto debe determinarse con absoluta claridad si al momento de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, al demandante se le indujo en error para que suscribiera los documentos necesarios para el traslado del régimen al que venía afiliado y, si dicho error conforme al Código Civil es generador de nulidad, toda vez que no todo error que cometan los agentes repercute sobre la eficacia de los actos jurídicos, sino solamente aquel, que real o presuntamente, llegue a convertirse en el móvil determinante de la voluntad, o sea, en la causa de la prestación de dicha voluntad, pues según al artículo 1524 del mismo ordenamiento señala que no puede haber obligación sin causa real y lícita.

Vistos los hechos de la demanda fácil es concluir que en el presente asunto no se da el vicio del consentimiento alegado por error, toda vez que el mismo no tiene la fuerza legal para repercutir sobre la eficacia jurídica del acto jurídico celebrado entre la demandante y PORVENIR S.A., por no tratarse de un error dirimente o error nulidad, que es aquel que, por esencial, afecta la validez del acto y lo condena a su anulación o rescisión judicial.

Conforme a lo anterior no estamos frente a lo consagrado en el artículo 1740 del Código Civil, el cual establece que es nulo todo acto o contrato al que le falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo, en este caso el consentimiento.

No obstante, la nulidad no se alegó dentro del término a que se refiere el artículo 1750 del Código Civil, norma que señala que el plazo para pedir la rescisión durara cuatro años, los cuales se contarán, en el caso de error o de dolo desde el día de la celebración del acto o contrato y si el traslado del régimen se hizo en el año 2007 según se desprende de los documentos acompañados con la demanda, la nulidad debió haberse pedido antes del año 2011.

Debe igualmente el despacho debe tener en cuenta que si existió la nulidad alegada la misma fue saneada en los términos del artículo 1752 del Código Civil, el cual dispone que la ratificación expresa o tácita puede sanear el vicio del contrato y, en el presente asunto la demandante saneó la nulidad por la ratificación tácita que autoriza el artículo 1754 ibidem, al ejecutar de manera voluntaria lo acordado en el contrato que autorizo el traslado de régimen en su momento, ello si se tiene en cuenta que la demandante durante todo este tiempo (diligenciamiento del formulario de cambio de régimen hasta la fecha de presentación de la demanda), ha consentido en que se le hagan los descuentos respectivos con destino al ahorro individual.

Ahora bien, en cuanto a la viabilidad de declaratoria de la nulidad del traslado cuando las administradoras de los fondos de pensiones faltan a su deber de información de manera completa los riesgos de un cambio de régimen, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, en las sentencias Nos. 31989 del 9 de septiembre 2008, 33083 del 22 de noviembre y 31314 del 6 de diciembre de 2011, y algunas más recientes se ha pronunciado al respecto que en los casos decididos por el órgano de cierre, en favor de los allí demandantes, se analizaron situaciones referentes a personas trasladadas cuyo perjuicio frente a los beneficios del régimen de transición eran palmarios, así:

1. En la sentencia 31989 del 09 de septiembre de 2008 al momento del traslado al RAIS, el actor ya había cumplido 55 años de edad y contaba con 20 años de servicio, por lo que había causado el derecho a la pensión de jubilación de la Ley 33 de 1985. “Bajo estos parámetros es evidente que el engaño que protesta el actor tiene su fuente en la falta al deber de información en que incurrió la administradora; en asunto neurálgico, como era el cambio de régimen de pensiones, de quien ya había alcanzado el derecho a una pensión en el sistema de prima media, su obligación era la de anteponer a su interés propio de ganar un afiliado, la clara inconveniencia de postergar el derecho por más de cinco años, bajo la advertencia de que el provecho de la pensión a los sesenta años, era solo a costa de disminuir el valor del bono pensional, castigado por su venta anticipada a la fecha de redención”.

2. En la sentencia 33083 del 22 de noviembre de 2011, cuando el demandante se trasladó del régimen de prima medida con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, contaba 58 años de edad y tenía una densidad aproximada de 1286 semanas cotizadas, por lo que estaba a 2 años de consolidar su pensión de vejez, ya que contaba con los aportes suficientes para acceder a la prestación económica. “es claro que tenía una expectativa legítima de adquirir el derecho a la pensión de vejez a cargo del ISS, por estar próximo a cumplir los requisitos que disponen sus reglamentos.

En las anteriores circunstancias, es evidente que un afiliado de las características del demandante tiene mayores beneficios permaneciendo en el régimen de prima media con



prestación definida, en cuanto conserva su transición, que trasladándose al de ahorro individual con solidaridad que administran los Fondos Privados de Pensiones, máxime que en este caso, el actor estaba a escasos 2 años para consolidar su pensión de vejez, ya que tenía las semanas suficientes para acceder a dicha prestación económica.”

3. En la sentencia 31314 del 06 de diciembre de 2011, el afiliado tenía más de 62 años de edad y se había desempeñado durante más de 19 años y 6 meses como servidor oficial en diversas entidades, cuando diligenció el formulario de traslado a la AFP, por lo que también estaba muy cercano a cumplir el tiempo de servicio requerido para obtener la prestación vitalicia. “Esos datos atinentes a la edad del accionante, nacido en octubre de 1934 y al tiempo de servicios desarrollado en el sector oficial, por 19 años y 6 meses, los suministró el accionante al Fondo de Pensiones demandado, según se lee en los formularios de folios 14 y 20 del expediente, es decir, que la Administradora demandada, admitió una afiliación de una persona en las reseñadas condiciones, sin enterar al interesado de las reales circunstancias pensionales del régimen de ahorro individual y con consecuencias frente a la dejación del de prima media con prestación definida que traía en la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN, amén de ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.”

4. Sentencia SL 12136 del 3 de septiembre de 2014, con ponencia de Elsy del Pilar Cuello Calderón, en este caso el demandante nació el 22 de octubre de 1947, por lo cual cumplió 60 años la misma fecha del año 2007 y se trasladó al RAIS en febrero de 2000 cuando le faltaban menos de 7 años para cumplir la edad pensional, y regreso al RPM en 1 de enero de 2001, sin embargo demandó la pensión con régimen de transición, por lo cual este precedente no es aplicable al caso en concreto.

5. En la sentencia SL 19447 del 27 de septiembre de 2017 con ponencia de Gerardo Botero Zuluaga, en este caso el demandante nació 25 de enero de 1944 y se trasladó en 2 de mayo de 2001 a la AFP cuando ya contaba con 57 años de edad, esto quiere decir que ya tenía un derecho adquirido al momento del traslado, en la cual la Corte precisó: “Esa lectura equivocada de las pruebas denunciadas, y que atrás se estudiaron, conllevó a que el juzgador desconociera además que el artículo 11 de la pluricitada ley 100 respeta los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos a quienes estén pensionados o hayan cumplido los requisitos, como es el caso de la accionante; de allí que no fuera cierta la afirmación según la cual no existía limitación legal de traslado a quienes ya tuviesen acreditadas las exigencias, menos cuando el mismo afectaba directamente a la afiliado e incluso, bajo la tesis que aquel expuso, la ponían en función de cotizar mínimo 500 semanas adicionales que exigía el artículo 61, lo cual es arbitrario si se tiene en cuenta que el derecho ya estaba consolidado”

6. En la Sentencia SL 17595 del 18 de octubre de 2017 con ponencia del Magistrado Fernando Castillo Cadena, en este caso el demandante nació el 1 de agosto de 1947 y se trasladó en febrero de 2000 a la AFP cuando ya contaba con 53 años de edad y 835 semanas cotizadas al ISS pues se afilió el 22 de abril de 1974, y la corte manifestó en esta oportunidad “máxime que, en este asunto, se reitera, están en juego aspectos tan trascendentes como la pérdida de la transición, y de contera la imposibilidad de acceder a la pensión de vejez, se requiere acudir a una hermenéutica que se avenga a los principios que inspiran al sistema y a los regímenes pensionales, en los que se prevé el traslado libre y voluntario, e incluso a las disposiciones que en la ley así lo imponen”

7. Recientemente en sentencia SL 4989 del 14 de noviembre de 2018, con ponencia del magistrado Gerardo Botero Zuluaga, se estudió el caso de una persona: “el demandante

se trasladó del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, contaba 57 años de edad, tenía una densidad de cotizaciones aproximada de 563 semanas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, según su historia laboral de folio 122; luego, es claro que ya tenía cumplidos los requisitos dispuestos por el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, para acceder al derecho a la pensión de vejez a cargo del ISS.” Razones estas por las cuales sigue sin existir un precedente consolidado para el caso sub examen.

8. En sentencia SL 1452 del 3 de abril de 2019 con radicado 68852 con ponencia de la H. Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, donde el demandante nació el 3 de diciembre de 1953, por lo que al 1.º de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad; realizó aportes al ISS a partir del 1.º de febrero de 1971 y que el 1.º de julio de 1995 se trasladó al fondo de pensiones Porvenir S.A. y retornó al ISS el 16 de octubre de 2007, por lo que nos encontramos frente a una persona con una expectativa legítima.

9. En sentencia SL1421 del 10 de abril de 2019 con radicado 56174 con ponencia del H. Magistrado Gerardo Botero Zuluaga, donde el demandante 29 de diciembre de 1948 y que a 1º de abril de 1994, contaba con más de 45 años; que estuvo afiliada ininterrumpidamente al ISS desde el 1 de diciembre de 1988 hasta el mes de julio de 1999; que el 1 de septiembre de 1999, se trasladó a PORVENIR S.A., para la fecha en que se produjo el traslado había cotizado más de 500 semanas comprendidas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento del requisito de edad, previsto en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, para causar su derecho pensional. - tenía un derecho adquirido-

Es así, que de las referencias atrás citadas se puede deducir que los traslados se realizaron cuando ya estaba en la prohibición legal e igualmente, se pueden concluir que, para dichas personas, un cambio de régimen resultaba supremamente gravoso, puesto que eran beneficiarios de transición, ya habían consolidado su derecho y/o estaban muy cercanos a cumplir el requisito faltante para obtener la pensión, por lo que era innegable el deber de la AFP de presentar información no sólo correcta, sino también suficiente, sin embargo, para el caso en concreto no se encuentra inmerso en una de las situaciones anteriormente mencionadas y de otro lado tampoco cuenta con una expectativa legítima según lo explicado por la jurisprudencia mencionada anteriormente, razón por la cual la posible falta de información en que pudo incurrir el fondo de pensiones no logra tener la identidad suficiente para configurar el engaño que a la postre invalide el cambio de régimen.

De otro lado, en sentencia proferida en segunda instancia por la Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial, dentro del proceso No. 2015-789 de conocimiento del Juzgado 5 Laboral del Circuito, la cual revocó la sentencia de primera instancia se pronuncia al respecto:

“La línea jurisprudencial en principio señala que la falta de información completa y comprensible al afiliado por parte de la administradora de pensiones puede configurar un engaño que conlleve a la anulación del traslado, sin embargo, a juicio de esta sala de forma mayoritaria estas providencias resaltan condiciones o expectativas legítimas pensionales de los demandantes al momento del traslado del régimen de prima media al régimen de ahorro individual en la medida que la información del traslado resultaba trascendental por cuanto los afiliados o bien habían consolidado el derecho a pensionarse según las normas de régimen de transición o cumplían uno de los requisitos en ello señalados, situaciones en las que el fondo de pensiones debe anteponer sus intereses las de lograr un afilado más”

Sobre dicho deber de información, en sentencia SL 12136 – 2014 del 3 de septiembre de 2014, radicación 46292, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, indicó que, al momento de resolver sobre viabilidad de la aplicación del régimen de transición ante la existencia de un traslado, es imperativo para el Juez, además de verificar los requisitos, verificar si el traslado se realizó bajo los parámetros de libertad informada, pues en su sentir:

“Solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de determinar si hubo eficacia en el traslado, lo que es relevante para entrar a fijar la pérdida o no de la transición normativa. Al juzgador no le debe bastar con advertir que existió un traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, sino que es menester, para la solución, advertir que la misma es válida, lo cual resulta un presupuesto obvio, máxime cuando esta Sala ha sostenido que el régimen de transición no es una mera expectativa.

(... )

Para este tipo de asuntos, se repite, tales asertos no comprenden solo los beneficios que dispense el régimen al que pretende trasladarse, que puede ser cualquiera de los dos (prima media con prestación definida o ahorro individual con solidaridad), sino además el monto de la pensión que en cada uno de ellos se proyecte, la diferencia en el pago de los aportes que allí se realizarían, las implicaciones y la conveniencia o no de la eventual decisión y obviamente la declaración de aceptación de esa situación. Esas reglas básicas, permiten en caso de controversia estimar si el traslado cumplió los mínimos de transparencia, y de contera, sirven de soporte para considerar si el régimen de transición le continuaba o no siendo aplicable”.

Recientemente en fallo de segunda instancia dictado el pasado 14 de agosto de 2018 (en el sentido de revocar el fallo de primera instancia y negar la nulidad de traslado) por parte Tribunal superior de Bogotá. Sala 4 de decisión conformada por RINHA ESCOBAR BARBOSA (M.P), DAVID ALBERTO JOSE CORREA y DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN, se manifestó:

(...) Sin embargo habrá de precisarse que en estas providencias al hacerse referencia a la plurimentada que es ineficacia el traslado siempre se trae a colación la existencia una expectativa legítima de pensionarse bajo un régimen anterior y que exigía de la respectivas administradoras demandadas la necesidad de que fuese informado al respectivo particular de esas consecuencias no beneficiosas en materia del monto de su pensión al perder el régimen de transición.

(...)

se insiste a la buena fe seriedad y honestidad que debe Predicar el extremo en una relación contractual REALMENTE ES PREOCUPANTE LA MASIVIDAD DE LAS PRESENTES ACCIONES QUE SÓ PRETEXTO DE UNA PRESUNTA FALTA DE INFORMACIÓN SUFICIENTE SE PRETENDE DEJAR SIN EFECTOS UNA DECISIÓN QUE HA SIDO CONSENTIDA DE FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA no se comparte Entonces lo manifestado por el a-quo cuando acude a precedente jurisprudenciales cuyos supuestos fácticos resultan ser diametralmente diferentes a los hoy planteados ciertamente en el radicado 31314 se ventila el caso de una persona que al momento de traslado contaba con 62 años de edad



y que había laborado 19 años al momento del traslado igual de imprecisa es la cita del radicado 33083 al que hace un momento hicimos referencia donde De igual forma se tratan supuesto estáticos dispares a los hoy puestos en consideración de esta sala de decisión en efecto en este pronunciamiento se hace referencia a una persona que pertenecía al régimen de transición que no es el caso del demandante.

(...)

Pensar lo contrario prácticamente sería exigir del fondo de pensiones privado un imposible Cuál es el imaginárselo salarios que permitían Establecer un monto mayor en el régimen de ahorro individual para que pueda exigírsele una proyección de una pensión de un afiliado o un afiliado cuando no se cuenta con información para ello;

Será prudente entonces suponer que la trabajadora que decidió su traslado siempre tendría el mismo ingreso o que su ingreso sería mayor y pues la respuesta es negativa a estos interrogantes porque de pensar ellos así sería autorizar a los juzgadores que edifiquen sus decisiones judiciales en suposiciones que contrarían nuestra seguridad jurídica y debido proceso.”

De lo anterior, se desprende que el demandante no se encuentra inmerso en una de las situaciones como las analizadas anteriormente, razón suficiente para que no se declare la nulidad de afiliación pretendida.

### 3.- Respecto de la carga de la prueba.

En cuanto a la carga de la prueba tenemos que el artículo 167 del C.G.P, reza del siguiente tenor”

“Artículo 167: Carga de la Prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagra el efecto jurídico que ellas persiguen.”

En este sentido el Honorable tribunal en varios pronunciamientos ha puesto de presente este artículo, como en la sentencia con ponencia del Magistrado Carlos Andrés Vargas del pasado 10 de octubre de 2017 proceso 19-2015-0915, frente a la carga de la prueba en este tipo de proceso manifestó:

“Los vicios de error fuerza y dolo deben ser demostrados por las partes que las alegan y de manera alguna pueden trasladarse a la entidad la carga de demostrar que no actuó con dolo lo anterior de conformidad con el artículo 167 del CGP las partes tienen la obligación de probar los supuestos facticos en que fundan sus alegaciones según el extremo que ocupan.”

En el mismo sentido la sentencia con radicado 07-2015-00822-01 con fecha del 25 de octubre de 2017 del Tribunal Superior de Bogotá Con ponencia del Magistrado Manuel Serrano Baquero en la que manifestó:

“Sobre vicios del consentimiento que ella presto al suscribir el traslado de régimen por error inducido o por dolo, estima la sala que no se aportaron pruebas pertinentes y suficientes por quien tenía la carga procesal; la parte demandante al tenor de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, se debe recordar además frente a los argumentos expuestos en esta audiencia que las consecuencias del traslado del régimen las definió la ley 100 claramente y por ello cualquier duda interpretativa de las normas constituía un error de derecho que no tenía alcance para viciar el consentimiento según los dispone la artículo 1509 del Código Civil, menos aún para personas como el

demandante que efectuaron traslados sucesivos en el RAIS en diferentes administradores de fondos de pensiones, de este último hecho da cuenta el documento de folio 64”.

Por su parte el Tribunal Superior de Bogotá esta vez con ponencia del Magistrado Rafael Moreno Vargas, en sentencia del pasado 18 de enero de 2018 con radicación N° 07-2016-00069-01 hizo lo propio al sostener que:

“Con base en los argumentos expuesto la citada alta corporación en casos Especialísimos ordeno la nulidad de la afiliación y dispuso el retorno del afiliado del RAIS al régimen de prima media, en ellos ha hecho valer la inversión de la carga de la prueba al considerar que le corresponde a las AFP demostrar la debida diligencia en el suministro de una información adecuada y coherente con la situación pensional del interesado en o al momento de la afiliación, pero se aclara por la sala que en dichas decisiones se advierte que se invierte la carga de la probatoria por el hecho de que los demandantes habían cumplido los derechos para adquirir una pensión con el régimen de transición o se encontraban muy cerca de consolidar el derecho pensional y así mismo ha procedido cuando con la decisión de traslado se cuarto o limito y restringió la posibilidad de acceder al régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993.

De lo anterior se resalta que la subregla de la inversión de la carga probatoria desarrollada en la jurisprudencia no se constituye como una regla probatoria de carácter general y por se obliga aplicarla en todos los casos, sino que en cada caso particular debe advertirse tal situación, es decir que su eventual procedencia, pues en el caso que tal circunstancia no se presente, deberá entonces el interesado si pretende la nulidad de afiliación probar que se incurrió en vicios del consentimiento advirtiendo que los hechos enrostrados frente a la posibilidad de pensionarse antes de tiempo o que podía obtener la devolución de lo ahorrado en caso de no configurar el derecho pensional entre otros, no se constituyen en sí mismo como razón suficiente para demostrar la invalidación de la afiliación, pues no resultan en estricto sentido legal, falsedades o información errada pues justamente la ley 100 de 1994 creo al RAIS con esas características por lo que el sistema jurídico posibilita que ello sea así sin que por ello se configuren vicios del consentimiento que den lugar a la nulidad de traslado tal como lo ha considerado el magistrado ponente en múltiples oportunidades.”

Conforme la jurisprudencia atrás citada la compete al aquí demandante demostrar el o los vicios del consentimiento alegado, no bastando para ello la siempre afirmación del demandante.

Cabe advertir que resulta desproporcional, colocar la carga de la prueba en las AFP en el caso en particular en Colpensiones, que en los casos que se ha declarado la nulidad, es la más afecta en lo atinente a los sostenibilidad del sistema pensional, máxime cuando la afiliación se dio en el año 2007 queriendo decir esto que han transcurrido más de 15 años a la fecha, configurándose imposible probar las circunstancias que rodearon la suscripción del traslado fecha para la cual no era obligatorio dejar un registro documental de la misma, por lo cual es completamente aplicable a estos casos el principio que reza “nadie está obligado a lo imposible .

Por las razones expuestas hay claramente una INEXISTENCIA DEL DERECHO Y DE LA OBLIGACIÓN POR FALTA DE CAUSA Y TITULO PARA PEDIR, conforme a lo citado en el capítulo de hechos y razones de la defensa, se infiere que a la accionante no le asiste ningún fundamento fáctico ni jurídico para el reclamo de sus pretensiones.

Por lo anteriormente expuesto NO se dan las condiciones legalmente exigidas y se ve la improcedencia en el reconocimiento de la pretensión de la demandante.

La entidad que represento siempre ha actuado dentro de los parámetros legales y constitucionales, amparado en el principio de la Buena Fe tanto de esta entidad como de las entidades o personas que acuden a ella en calidad de usuarios o afiliados y en desarrollo de lo expresado en nuestra carta magna artículo 83 que indica que "las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante ésta".

Con base en lo anterior, las decisiones en relación con lo pretendido por parte de la entidad que represento han sido fundamentadas en la Ley.

En consecuencia, solicito se ABSUELVA a la entidad que represento de todos los cargos contra ella formulados, acogéndome para tal efecto a las anteriormente alegadas razones de la defensa igualmente niego el derecho, causa y razón invocados por el demandante y como la acción es manifiestamente temeraria solicito se condene en costas a la demandante.

En consecuencia, solicito se NIEGUEN las pretensiones de la demanda, acogéndome para tal efecto a las anteriormente alegadas razones de la defensa.

### **3.1. IMPROCEDENCIA DE DECLARATORIA DE NULIDAD O INEFICACIA EN EL CASO PARTICULAR.**

Es de señalar que el traslado de los aportes enunciados anteriormente se realizó con plena voluntad del cotizante y en consecuencia no es procedente declarar la nulidad de la afiliación realizada por la accionante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y condenar a mi representada a recibir los aportes para activar la afiliación al régimen de prima media con prestación definida, teniendo en cuenta que por decisión propia solicitó, suscribiendo los formularios para efectuarlo, **voluntad que se vio ratificada con los más de 28 años que ha realizado cotizaciones** al régimen de ahorro individual con solidaridad. Además, el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, establece la libre escogencia entre regímenes pensionales y también la posibilidad de trasladarse una vez cada cinco años contados a partir de la selección inicial, sin embargo, por razones financieras y de estabilidad en el sistema pensional el artículo 1 del Decreto 3800 de 2003, limitó este derecho cuando al afiliado le faltare 10 años o menos para alcanzar la edad a pensión, salvo los afiliados que tuviera 15 años cotizados a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones (1 de abril de 1994), para quienes se conservó el derecho a regresar al Régimen de Prima Media en cualquier momento, situación que el demandante no cumple para su retorno automático.

Ahora bien, sobre la constitucionalidad de las anteriores restricciones se pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia C-1024 de 2004 cuyo contenido reprodujo en lo pertinente en la sentencia C- 062 de 2010, en dichos fallos manifestó:

*"El objetivo perseguido con el señalamiento del periodo de carencia en la norma acusada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del régimen solidario de prima media, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que por lo mismo no*

*fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarían en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste económico, pudiesen trasladarse de régimen cuando estuviesen próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y por ende poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes”*

Desde esta perspectiva dice la Corte Constitucional:

*Que dicho régimen se sostiene sobre las cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, para que una vez cumplidos los requisitos de edad y semanas puedan obtener una pensión mínima independientemente de las sumas efectivamente cotizadas, permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, resulta contrario no solo al concepto constitucional de Equidad (C.P. art 95), sino también al principio de eficiencia pensional, el cual consiste en obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho el sistema de seguridad social.”*

Así mismo, revisado el expediente administrativo de la demandante, no se observa solicitud alguna concerniente al traslado que hubiera podido solicitar ante COLPENSIONES, o alguna posible solicitud de la información sobre las diferencias entre un régimen y otro con anterioridad al año **2022**, atendiendo a que peticionaba que la afiliación fuera nula, situación que permitió establecer que para la data en la que elevó dicha solicitud ya estaba dentro de la prohibición de la que habla el artículo 2 de la Ley 797 de 2003

### **3.2. IMPROCEDENCIA DE REQUERIR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA INEXISTENTE AL MOMENTO DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL REALIZADO POR LA PARTE ACTORA.**

Respecto del deber de información que recae en cabeza de las administradoras de pensiones, es preciso recordar que las demandadas no desconocen su existencia desde el año 1993, con la expedición de la ley 100 de 1993 y el del decreto 663 de 1993, sin embargo es de resaltar que dicho deber se intensifica con la expedición de la ley 1328 de 2009, en donde el deber de información se convierte en un deber de asesoría y buen consejo, por lo que no es dable requerir las mismas formalidades en la asesoría previa al traslado desde el momento mismo de la creación del régimen de ahorro individual con solidaridad y darle el mismo alcance que el legislador y la jurisprudencia le han dado con el transcurso del tiempo.

No es razonable ni jurídicamente válido imponer a las administradoras obligaciones y soportes de información no previstos en el ordenamiento jurídico vigente al momento del traslado de régimen, pues tal exigencia desvirtúa el principio de confianza legítima, teniendo en cuenta que el principio de legalidad y el debido proceso, no consisten solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se juzga.

El juzgamiento de la conducta de los fondos con base en normas inexistentes, no tiene justificación jurídica alguna y viola gravemente el debido proceso de Colpensiones quien

sin haber participado en el trámite de traslado es quien debe afrontar la carga de la prestación.

### **3.3. DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS Y LAS EXPECTATIVAS LEGITIMAS**

Para el caso que nos ocupa debe indicar que según lo señala la sentencia C-596 de 1997

"cuando, en vigencia de la ley que señala tales requisitos, estos llegan a cumplirse, se habla de derecho adquirido en materia de seguridad social. Cuando, por el contrario, durante el término de vigencia de la ley que prescribe tales condiciones, la persona que aspira a la titularidad de ellos está en vía de cumplirlas, se habla de expectativa de derecho".

De otra parte la Corte Constitucional en Sentencia de Unificación 130 de 2013 indicó que:

*"más allá de la tesis jurisprudencial adoptada en algunas decisiones de tutela, que consideran la posibilidad de trasladado "en cualquier tiempo", del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, con beneficio del régimen de transición para todos los beneficiarios de régimen, por edad y por tiempo de servicios, la Corte se aparta de dichos pronunciamientos y se reafirma en el alcance fijado en las sentencias de constitucionalidad, en el sentido de que solo pueden trasladarse del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, en cualquier tiempo, conservando los beneficios del régimen de transición, los afiliados con 15 años o más de servicios cotizados a 1º de abril de 1994.*

*Lo anterior por cuanto, se reitera, las normas que consagran el régimen de transición, así como la pérdida del mismo, y la posibilidad de traslado entre regímenes pensionales con sus correspondientes restricciones, fueron objeto de control constitucional por parte de esta corporación, a través de las Sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, analizadas con detalle en el acápite precedente, que definieron su verdadero sentido y alcance, considerándolas acordes con la Constitución, y al tratarse de decisiones con efectos de cosa juzgada, adquieren un carácter definitivo, incontrovertible e inmutable, de tal manera que sobre ellas no cabe discusión alguna".*

Es claro que en este asunto no estamos frente a derechos adquiridos por lo que debe recordarse que las figuras señaladas tienen consecuencias jurídicas bien distintas: los derechos adquiridos, al tenor del artículo 58 la Carta Política, ya estaba dentro de la prohibición de la que habla el artículo 2 de la Ley 797 de 2003

### **3.4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES TAMBIÉN RECAEN EN CABEZA DEL AFILIADO COMO CONSUMIDOR FINANCIERO.**

No debe desconocerse que el vínculo contractual generado a partir de la selección y afiliación a uno u otro régimen pensional, genera obligaciones recíprocas, tal y como lo establece el artículo 1495 del código civil, en los siguientes términos:

*"ARTICULO 1495. DEFINICION DE CONTRATO O CONVENCION. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas."*

De esta manera no se puede desconocer que el afiliado también tiene obligaciones para con la administradora de pensiones que elija, tal y como lo ha determinado el decreto 2241 de 2010, que en su artículo 4º enuncia los deberes de los consumidores financieros del Sistema General de Pensiones, dentro de los cuales se resalta:

*"1. Informarse adecuadamente de las condiciones del Sistema General de Pensiones, del nuevo Sistema de Administración de Multifondos y de las diferentes modalidades de pensión.*

*2. Aprovechar los mecanismos de divulgación de información y de capacitación para conocer el funcionamiento del Sistema General de Pensiones y los derechos y obligaciones que les corresponden.*

*3. Emplear la adecuada atención y cuidado al momento de tomar decisiones, como son entre otras, la afiliación, el traslado de administradora o de régimen, la selección de modalidad de pensión y de entidad aseguradora que le otorgue la renta vitalicia o la elección de tipo de fondo dentro del esquema de "Multifondos", según sea el caso."*

Conforme a lo anterior, es evidente que el deber de información se integra, por una parte con la obligación de asesoría y buen consejo que deben suministrar las administradoras de pensiones a los posibles afiliados, pero también con la información que deben adquirir de manera autónoma los consumidores financieros, acerca de las condiciones, modalidades y sistemas que integran los regímenes pensionales, que permita tomar decisiones, con el debido cuidado y atención que merece la decisión por ejemplo de afiliarse, trasladarse o escoger una modalidad particular, acorde a las expectativas pensionales de cada afiliado.

**3.5. ANÁLISIS DE CADA CASO EN PARTICULAR CON MIRAS A EVITAR  
REGLAS GENERALES Y AUTOMÁTICAS QUE PERMITAN TRASLADO DE  
RÉGIMEN PENSIONAL BAJO CUALQUIER CIRCUNSTANCIA –  
ACLARACIÓN DE VOTO MAGISTRADO RIGOBERTO ECHEVERRY  
BUENO, SENTENCIA CSJ SL 1452 DE 2019, RAD. 68852.**

En atención a los múltiples pronunciamientos que han realizado nuestras altas cortes, en los que se han fijado parámetros para el análisis de las pretensiones tendientes a la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional, no se puede dejar de lado la particularidad de cada caso, que también ha sido objeto de análisis por parte de los órganos de cierre, en el presente asunto, nos encontramos frente a una persona capaz, consiente y con unas calidades académicas y profesionales particularmente altas, que permiten establecer que la decisión que tomo durante la afiliación al RAIS, estuvo precedida de la información necesaria para concluir que el traslado realizado era la opción más viable para sus intereses futuros, en ese entendido, no puede considerarse que factores como la fluctuación en el mercado de trabajo, evolución de los salarios de la parte actora y otras variables que representan mayor o menores réditos, sean razones suficientes para considerar que no se le suministro toda la información necesaria para predecir las consecuencias en su futuro pensional, así lo expreso el Magistrado Rigoberto Echeverry Bueno en la aclaración de voto que realiza en la Sentencia CSJ SL 1452 de 2019, cuando indica:

*"(...) existen otros eventos en los que no es posible visualizar perjuicios inmediatamente derivados de la decisión del traslado, de manera que las*



*presuntas falencias en la información no producen un efecto cierto o por lo menos determinable en ese momento. Ante tales supuestos, el afiliado debe someterse a las condiciones del sistema por el que optó y puede verse beneficiado o perjudicado, en función de factores como su fluctuación en el mercado de trabajo, la evolución de sus salarios y otras variables que bien le pueden acarrear mayores o menores réditos, respecto de las prestaciones que hubiera podido conseguir en otro régimen. Estos casos, en mi criterio, deben quedar abrigados por la decisión del trabajador y su apuesta por la construcción del derecho en determinado régimen, de manera que no pueden generar la ineficacia del traslado (...)*

Por otro lado, la conveniencia de pertenecer a un régimen o a otro, resulta clara para los casos que ha estudiado la Corte Constitucional, cuando una persona perdía la transición, o para quienes habían cumplido uno de los dos requisitos dispuestos en la ley para alcanzar la pensión en el régimen de prima media o incluso para quienes tenían una expectativa cercana de acceso a la prestación, y en dichas condiciones no se encuentra el demandante.

Por su parte el Decreto 692 de 1994 en su artículo 11 establece que la selección del régimen pensional implica la aceptación de las condiciones propias de este para acceder a las prestaciones de invalidez, vejez o muerte. (El subrayado es nuestro).

Señala la norma anterior, los requisitos de forma que debe contener el formulario que se debe diligenciar para adelantar el proceso de vinculación con la respectiva administradora. Y finalmente, establece que cuando el afiliado se traslade por primera vez del RPM al RAIS, en el formulario deberá consignarse que la decisión de trasladarse al régimen seleccionado se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones y además autoriza la norma a que el formulario contenga leyenda impresa en este sentido.

Ahora bien, en el caso de que la falta de información se hubiera basado en que la **AFP COLFONDOS S.A.**, no realizaron una proyección pensional a la señora **BARBARA ROCIO CALA ACEVEDO** al momento de su traslado, preciso resulta indicar al despacho, que las proyecciones pensionales no son pruebas útiles para demostrar un eventual vicio en el consentimiento al momento en que decidió su afiliación dentro de las opciones que la ley le daba. Sumado a ello, dicha obligación de emitir por parte de las AFP herramientas financieras o proyecciones pensionales a los potenciales afiliados nació con el Decreto 2071 de 2015, es decir, con posterioridad al traslado del demandante.

Además, el mencionado Decreto en su artículo 2.6.10.4.3. Parágrafo 2 establece:

*"Parágrafo 2º. La proyección de que trata este artículo, proporcionada por la Administradora del Régimen de Ahorro individual con Solidaridad, a través de las herramientas financieras, deberá entenderse como un cálculo estimado de la eventual futura pensión. La Administradora deberá informar al afiliado que la mesada pensional resultante es una mera proyección y no un derecho consolidado, por fundamentarse en una simulación de supuestos futuros probables, pero sin certeza sobre la ocurrencia."* (El subrayado es nuestro.)

Ahora bien, como quiera que el monto pensional en el RAIS también depende de variables como el rendimiento financiero de los fondos sujetos al comportamiento fluctuante de la economía, incierto resulta establecer un posible monto que le permitiera en ese momento a el demandante evaluar cuál sería a futuro el régimen más favorable, en esa medida, no

se puede afirmar que el supuesto silencio de la **AFP COLFONDOS S.A.**, en estos puntuales aspectos constituya falta en el deber de información.

### **3.6. LA CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA NO PUEDE SER APLICADA EN FORMA GENÉRICA, SIN NINGUNA PONDERACIÓN, Y EN DESIGUALDAD DE LAS PARTES INVOLUCRADAS EN UN PROCESO.**

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 167 de la ley 1564 de 2012, es evidente que quien afirma la ocurrencia de un hecho, es quien debe soportar probatoriamente la carga que ello genera, de tal forma que la regla general es que corresponde a cada parte probar el supuesto de hecho que exhibe y atendiendo las situaciones particulares del caso, no obstante lo anterior, el juez puede invertir la carga de la prueba exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias.

La carga dinámica e inversión de la prueba al interior de un proceso judicial exige la igualdad entre las partes con parámetros de buena fe y lealtad procesal. Bajo estas circunstancias el principio "quien alega debe probar" cede su lugar al principio "quien puede debe probar". Para determinar quién es el que puede probar dentro de un proceso judicial la Corte Constitucional ha señalado que depende de cada situación particular. Así la sentencia C 086 de 2016 que analizó la constitucionalidad del art. 167 del Código General del Proceso, indicó:

*7.4.- En lo concerniente a la configuración de la carga dinámica de la prueba debe decirse que atiende su inspiración teórica, fundada en los pilares de solidaridad, equidad (igualdad real entre las partes), lealtad y buena fe procesal, todos ellos reconocidos en la Carta Política de 1991, donde el principio "quien alega debe probar" cede su lugar al principio "quien puede debe probar". Su ejercicio por parte del juez es, en consecuencia, manifestación de una competencia plenamente legítima bajo el prisma de un Estado Social de Derecho.*

*En la regulación aprobada por el Legislador este decidió también de manera deliberada y consciente no fijar un catálogo cerrado de episodios en las cuales puede tener cabida la carga dinámica de la prueba. Por el contrario, dejó abierta esa posibilidad al juez, **"según las particularidades del caso"**, para lo cual mencionó solo algunas hipótesis: (i) la posesión de la prueba en una de las partes, (ii) la existencia de circunstancias técnicas especiales, (iii) la previa y directa intervención en los hechos, (iv) el estado de indefensión o de incapacidad de una de las partes, "entre otras circunstancias similares".*

Para el caso que nos ocupa, es preciso analizar las particularidades del caso, así:

Hasta el año 2016, los fondos privados cuentan exclusivamente con el consentimiento vertido en el formulario de afiliación, para probar el conocimiento y asentimiento del afiliado respecto del traslado, por cuanto las leyes que surgieron entre el año 1994 y 2016 no exigían nada diferente al documento de afiliación donde constaba la plena intención de pertenecer al Régimen de ahorro individual con solidaridad.

Imponer cargas adicionales a las previstas en las leyes de la época se constituye en una situación de carácter imposible.



Igualmente, si bien existe una intervención de asesoría de la administradora de pensiones que podría generar un vicio en la voluntad del traslado, ello debe demostrarse pues de lo contrario predominarían las conjeturas y suposiciones, y no los hechos debidamente demostrados en el proceso en los que intervino directamente el demandante.

No pueden considerarse a todos los afiliados como una parte débil e indefensa, la misma ley previó distintos deberes en cabeza de los mismos con el fin de que por interés propio se asesoren de la mejor manera. Adicionalmente no pueden desconocerse las situaciones que rodean cada caso y que de alguna manera le permitían al demandante obtener información mínima durante el paso del tiempo. La Corte Constitucional en sentencia T 122 de 2017 ha indicado, en este sentido y en diversas providencias que nadie puede alegar su propia culpa a favor:

*"Una persona no es digna de ser oída ni menos pretender el reconocimiento de un bien jurídico a partir de su conducta reprochable. Para la Corte, nadie puede presentarse a la justicia para pedir la protección de los derechos bajo la conciencia de que su comportamiento no está conforme al derecho y los fines que persigue la misma norma. Este principio no tiene una formulación explícita en el ordenamiento jurídico. No obstante, lo anterior, la Corte Constitucional ha hecho alusión a su naturaleza de regla general del derecho, al derivarse de la aplicación de la analogía iuris. Por ello, cuando el juez aplica dicha regla, se ha señalado que el mismo no hace otra cosa que actuar con fundamento en la legislación."*

Con lo señalado hasta ahora, debe considerarse que la carga dinámica de la prueba no puede invertirse de una forma arbitraria y sin considerar los aspectos particulares de cada caso debidamente individualizado, tal y como lo precisó la Corte Constitucional en la citada providencia C 086 de 2016:

*"Imponer al juez la obligación de acudir en todos los eventos a la institución de la carga dinámica de la prueba, y no de manera ponderada de acuerdo con las particularidades de cada caso y los principios generales de la Ley 1564 de 2012, significaría alterar la lógica probatoria prevista en el estatuto procesal diseñado por el Legislador, para en su lugar prescindir de las cargas procesales razonables que pueden imponerse a las partes y trasladar esa tarea únicamente al juez"*

De tal forma que evitar reglas automáticas que permitan el traslado de régimen pensional bajo cualquier condición y aprovechándose de la imposibilidad que tiene la parte demandada de probar un hecho que ni la legislación ni la jurisprudencia exigían configurar para el momento del traslado, resulta necesario y procedente en el presente asunto, dadas las particularidades del caso.

### **3.7. NO ES DABLE ALEGAR IGNORANCIA DE LA LEY, PARA JUSTIFICAR UNA DECISIÓN TOMADA HACE MÁS DE 20 AÑOS.**

Por otra parte, observando que el demandante manifiesta que la falta de información también radica en que no se le explicaron las ventajas y desventajas del régimen de ahorro individual, debe precisarse que las características, condiciones y modalidades pensionales propias de este régimen están consignadas en los artículos 59 y siguientes de la ley 100 de 1993, norma que por ser de alcance nacional impone su conocimiento a

todos los ciudadanos a partir de su promulgación en los términos del artículo 11 del Código Civil, por tanto no es dable alegar la ignorancia como excusa a voces de lo que prevé el artículo 9 de la Codificación antes citada, para atribuir a la AFP la responsabilidad de haber omitido información al respecto ya que este señalamiento lo hace la ley, máxime cuando el demandante de manera voluntaria suscribió el formulario de afiliación al RAIS.

De otro lado, si el señor juez concluyera que le asiste razón al demandante y ordena el respectivo traslado entre regímenes, debe decirse que para el respectivo traslado de aportes se debe cumplir con lo normado en el artículo 113 de la Ley 100 de 1993, que establece:

*"ARTÍCULO 113. TRASLADO DE RÉGIMEN. Cuando los afiliados al Sistema en desarrollo de la presente Ley se trasladen de un régimen a otro se aplicarán las siguientes reglas:*

*a) Si el traslado se produce del Régimen de Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, habrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales en los términos previstos por los artículos siguientes;*

*b) Si el traslado se produce del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prestación Definida, se transferirá a este último el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos, que se acreditará en términos de semanas cotizadas, de acuerdo con el salario base de cotización"*

En consecuencia, de lo antes expuesto, solicito muy respetuosamente al Despacho, desestimar estas pretensiones, absolviendo a mi representada de cada una de ellas.

Finalmente, no puede desconocerse el gran problema que puede generar el traslado indiscriminado de afiliados que excusándose en presuntas faltas al deber de información de las administradoras de pensiones, pretenden acceder a una prestación en el régimen de prima media con prestación, cuando no han guardado fidelidad al sistema; es importante tener en cuenta el principio de sostenibilidad financiera del sistema Pensional, del cual la CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-242 de 2009. Magistrado Ponente Mauricio González Cuervo, indicó:

*"Las reformas a los regímenes pensionales, en particular, garantizan la sostenibilidad financiera del sistema pensional y la financiabilidad de otros potenciales pensionados. Estas finalidades constitucionalmente relevantes obligan a la ponderación entre sacrificios individuales y beneficios al sistema (artículo 48 CP, adicionado por el Acto Legislativo No. 1 de 2005). Ello explica que esta Corte haya puesto de presente que el Legislador no está obligado a sostener en el tiempo las expectativas que tienen las personas, conforme a las Leyes vigentes, en un momento determinado. Su potestad de configuración legislativa le habilita a modificar los regímenes jurídicos en función de nuevas variables, razones de oportunidad o conveniencia, y a otros intereses y circunstancias contingentes que deba priorizar para lograr los fines del Estado Social de Derecho, desde luego, consultando parámetros de justicia y equidad, y con sujeción a criterios de razonabilidad y proporcionalidad"*

En igual sentido la Corte Constitucional en la sentencia C-1024 del 2004 cuyo contenido reprodujo en lo pertinente en la sentencia C-062 del año 2010; la Corte indicó:

*"(...)el objetivo perseguido con el señalamiento del período de carencia en la norma acusada, consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarán en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste periódico; pudiesen trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y, por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes (...)*

*Desde esta perspectiva si dicho régimen se sostiene sobre las cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, para que una vez cumplidos los requisitos de edad y número de semanas, puedan obtener una pensión mínima independientemente de las sumas efectivamente cotizadas. Permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, resulta contrario no sólo al concepto constitucional de equidad (C.P. art. 95), sino también al principio de eficiencia pensional, cuyo propósito consiste en obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho la seguridad social (...)"*

Aunado a lo anterior, es de recordar que el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media con prestación definida, tienen diferente forma de distribución del monto de los aportes, pues recordemos que mientras en el RPM el 13% de los aportes son destinados a financiación de pensión de vejez y reservas y el 3% a pensión de sobrevivientes e invalidez y gastos de administración, en el régimen de ahorro individual con solidaridad tan solo el 11.5% del aporte va dirigido a la cuenta de ahorro individual con solidaridad, el 3% para seguros previsionales y gastos de administración y 1.5% al fondo de garantía de pensión mínima, por lo que el eventual traslado de lo consignado en la cuenta de ahorro individual con solidaridad, no corresponder porcentualmente a lo que en el régimen de prima media se destina para la financiación, en este caso de la pensión de vejez.

De igual manera es evidente que han pasado muchos años en los cuales el demandante no contribuyo con el fondo común que financia las pensiones de las personas que han guardado fidelidad al régimen de prima media con prestación definida, ello conlleva al detrimento patrimonial que pretende evitar el principio de sostenibilidad financiera, pues basta con citar el artículo 20 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 7 de la ley 797 de 2003, que a su vez incremento el valor del aporte mediante decreto 4981 de 2007 al 16% para aporte a pensiones, en los cuales se estipulo que:

*"ARTÍCULO 7o. El artículo 20 de la Ley 100 de 1993 quedará así:*

*Artículo 20. Monto de las cotizaciones. La tasa de cotización continuará en el 13.5% del ingreso base de cotización.*

*En el régimen de prima media con prestación definida el 10.5% del ingreso base de cotización se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. El 3% restante sobre el ingreso base de cotización*

*se destinará a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes.*

*En el régimen de ahorro individual con solidaridad el 10% del ingreso base de cotización se destinará a las cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del ingreso base de cotización se destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.*

*(...) El incremento de la cotización se destinará en el régimen de prima media al pago de pensiones y a la capitalización de reservas pensionales”*

El incremento se dio a través del decreto 4982 de 2007 que estipulo:

*"Artículo 1°. Cotización al Sistema General de Pensiones. A partir del 1° de enero del año 2008, la tasa de cotización al Sistema General de Pensiones será del 16% del ingreso base de cotización”*

Conforme a lo anterior, es evidente que el eventual traslado de régimen pensional del demandante, afecta significativamente el sistema financiero del RPM, teniendo en cuenta la variación porcentual de la destinación del aporte en ambos regímenes pensionales, la falta de contribución del demandante al fondo común que financia las pensiones en el RPM y la carga que generaría en los demás afiliados soportes un eventual reconocimiento pensional a favor del demandante, quien no ha construido un derecho pensional en el régimen de prima media.

#### **4. LEGISLACION APLICABLE AL CASO**

##### **4.1. Artículo 2 DE LA LEY 797 DE 2003.**

Es necesario precisar para el caso que nos ocupa, que el demandante se encuentra inmerso en una prohibición preceptuada en el artículo en mención, mismo que reza lo siguiente:

*"Se modifican los literales a), e), i), del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y se adiciona dicho artículo con los literales l), m), n), o) y p), todos los cuales quedarán así:*

*Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”*

Revisando los hechos de la demanda, se tiene que la demandante, a la fecha de solicitud de traslado del RAIS al RPM, ya se encontraba inmersa en la prohibición de que trata el artículo 2 de la ley 797 de 2003 por estar a menos de 10 años de cumplir la edad mínima exigida por la Ley para acceder a esta prestación, por lo que se

enmarca su situación en la norma antes citada, de allí que COLPENSIONES, actuando bajo los preceptos normativos, negó el pretendido traslado.

#### **4.2. ARTÍCULO 113 DEL LA LEY 100 DE 1993.**

*"Cuando los afiliados al Sistema en desarrollo de la presente Ley se trasladen de un régimen a otro se aplicarán las siguientes reglas:*

*a) Si el traslado se produce del Régimen de Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, habrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales en los términos previstos por los artículos siguientes;*

*b) Si el traslado se produce del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prestación Definida, se transferirá a este último el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos, que se acreditará en términos de semanas cotizadas, de acuerdo con el salario base de cotización".*

De la norma en cita se desprende que no basta con trasladar los aportes realizados efectivamente cotizados al Fondo Privado de Pensiones, sino que la AFP debe emitir el respectivo bono pensional donde se incluya el saldo de la cuenta individual y los rendimientos, para luego si realizar la respectiva aprobación del traslado de régimen y de aportes.

#### **4.3. SENTENCIA C-1024 de 2004.**

En el presente caso, la medida prevista en la norma acusada, conforme a la cual el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, resulta razonable y proporcional, a partir de la existencia de un objetivo adecuado y necesario, cuya validez constitucional no admite duda alguna. En efecto, el objetivo perseguido por la disposición demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material de la justicia, que personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros.

#### **4.4. INCISO 4º ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993 / SENTENCIA C 789 DE 2002 y ARTICULO 3º DEL DECRETO 3800 DE 2003.**

La ley 100 de 1993 en su artículo 36, estableció el régimen de transición para aquellas personas que a la entrada en vigencia de la citada ley, esto es 1 de abril de 1994, acreditaran bien sea el cumplimiento de la edad, 35 años para las mujeres y 40 años para los hombres o 15 años de servicio o cotizaciones. Sin embargo, en el inciso 4º del artículo en mención, se estableció la inaplicabilidad del régimen de transición para quienes se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad. Posteriormente, este inciso fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional en sentencia de fecha 24 de septiembre de 2002, bajo el radicado C789 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, estableciendo que el régimen de transición no será aplicable a quienes se trasladen al régimen de ahorro individual, con excepción de quienes acrediten haber tenido 15 años o más de servicios cotizados al 1 de abril de 1994, requisito que ha sido reiterado en sentencia C 1024 de 2004 y SU 062 de 2010.



#### **4.5. ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993:**

*"Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen (...)"*

#### **4.6. LEY 71 DE 1988**

*"A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.*

*El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas"*

#### **4.7. DECRETO 3800 DE 2003.**

*"Artículo 3°. Aplicación del Régimen de Transición. En el evento en que una persona que a 1° de abril de 1994 tenía quince (15) o más años de servicios prestados o semanas cotizadas, que hubiere seleccionado el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, decida trasladarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, le será aplicable el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo cual podrán pensionarse de acuerdo con el régimen anterior al que estuvieren afiliados a dicha fecha, cuando reúnan las condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: a) Al cambiarse nuevamente al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, se traslade a él el saldo de la cuenta de ahorro individual del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, y b) Dicho saldo no sea inferior al monto total del aporte legal para el riesgo de vejez, correspondiente en caso de que hubieren permanecido en el Régimen de Prima Media, incluyendo los rendimientos que se hubieran obtenido en este último. En tal evento, el tiempo cotizado en el Régimen de Ahorro Individual le será computado al del Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Para efectos de establecer el monto del ahorro de que trata el literal b) anterior no se tendrá en cuenta el valor del bono pensional (...)"*

#### **4.8. ARTÍCULOS 9, 11, 1509 Y 1754 DEL CÓDIGO CIVIL:**

Ante las manifestaciones que sirvieron de sustento al contestar las pretensiones de la demanda, es claro evidenciar que estamos en presencia de una negligencia por parte del demandante, teniendo en cuenta que desconoce los preceptos normativos que contiene la

Ley de seguridad social (Ley 100 de 1993), al indicar que las AFP son las que tienen la obligación de informar sobre ventajas y desventajas del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al cual se encuentra válidamente afiliado a la fecha. Y es que esta situación configura un desconocimiento de la norma en mención, misma que a voces del artículo 9 de la Codificación Civil, no sirve de excusa para declararla absuelta de cualquier culpa o error que haya conocido, máxime cuando en la Ley 100 de 1993, se evidencia la explicación y funcionamiento de los regímenes existentes en nuestro sistema de seguridad social.

Y es que el pilar de la presente acción es la omisión de las AFP demandadas, por cuanto estas, se hicieron presente en la antesala de la afiliación a la presente data en la que el demandante aún se encuentra afiliado, interregno en el cual, debe de conocer por su propia cuenta la norma que regula el régimen para el cual efectúa sus aportes, pues el artículo 11 del Código Civil es claro al manifestar que los efectos de la ley se surten a partir de la promulgación de estos, lo que hace imperioso el conocimiento de la norma que regula los derechos, deberes y obligaciones como afiliado de un régimen, el cual, sin lugar a equívocos regula el artículo 59 y s.s. de la ley 100 de 1993.

En ese orden de ideas su señoría, en el presente asunto no se puede configurar un vicio del consentimiento, por cuanto se configura un ERROR SOBRE UN PUNTO DE DERECHO, el cual no vicia el consentimiento de las partes, al ser claro el contenido de la ley que regula el funcionamiento de los regímenes pensionales existentes.

No se puede pasar por alto que, al suscribir un formulario de afiliación, medió el consentimiento de la parte contratante, situación que puede declararse nula al evidenciarse un vicio en el ya mencionado consentimiento, mismo que puede ser saneado con el paso del tiempo tal como lo preceptúa el artículo 1754 del Código Civil:

*"RATIFICACIÓN TÁCITA: La ratificación tácita es la ejecución voluntaria de la obligación contratada".*

Vemos entonces claramente, como el Código Civil regula el saneamiento de la nulidad, que para el caso de marras se dio con la ratificación tácita del demandante al permanecer al RAIS, efectuando los aportes a los riesgos de vejez, invalidez y muerte.

#### **4.9. SL 373 DE 2021**

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL 373-2021, moderó el precedente respecto a la posibilidad de materializar los efectos de la ineficacia, esto es, retrotraer las cosas al estado anterior, tratándose de demandantes que ya tienen una situación jurídica consolidada o adquirieron el estatus de pensionados en el régimen de ahorro individual.

A este respecto, el Alto Tribunal de la especialidad laboral reflexionó que al haberse adquirido la calidad de pensionado, se produce la imposibilidad de retornar al estatus quo ante, es decir, tal condición no puede deshacerse o desaparecerse del plano jurídico, pues ello conllevaría a:

*"disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto."*

Porque no es posible revertir ciertos efectos económicos como el deterioro que sufre el capital que ya ha sido objeto de pago a través de mecanismos de financiación como los bonos pensionales y las cuotas partes de entidades contribuyentes, como consecuencia ineludible del pago de mesadas pensionales. En efecto, es irreparable la pérdida de integridad del músculo financiero con que se respalda el pago de la prestación, por lo que forzar a través de una ficción jurídica la vuelta al estado anterior en que se encontraba las cosas, va en detrimento de los recursos de la Seguridad Social, bien sea que provengan de la Nación y/o demás entidades que deben contribuir al financiamiento del pasivo pensional.

Sumado a lo anterior, se torna inviable la realización de los efectos de la ineficacia, por cuanto no es posible cesar los efectos jurídicos de las operaciones, contratos y actos que involucran a terceros como aseguradoras, entidades oficiales e inversiones, que según la modalidad pensional en que se encuentre el actual pensionado, hayan concurrido en la administración y gestión del riesgo financiero, entre otras muchas problemáticas de orden financiero, que ocasionarían un déficit económico entre los actores del Sistema que han confluído en la gestión de los recursos a través de relaciones jurídicas válidamente suscitadas en el mundo jurídico del Sistema General de Pensiones, en cumplimiento de obligaciones y deberes contractuales que ya se encuentran consumados y perfeccionados con las consecuencias de orden legal y financiero que ello acarrea.

En conclusión, no procede la declaratoria de ineficacia y/o nulidad de traslado de régimen pensional, en los casos en que la parte demandante se trate de una persona que ya se encuentre pensionada en el régimen de ahorro individual en cualquiera de sus modalidades, situación que deberá verificarse en el caso de la señora **BARBARA ROCIO CALA ACEVEDO**

Razones por las cuales, no debe accederse a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia deberá **Absolverse**, a Colpensiones de todas aquellas incoadas en su contra.

## **5. PRONUNCIAMIENTO EXPRESO A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA**

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones tanto declarativas como condenatorias de la demandante y en consecuencia solicito se absuelva a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** de todas y cada una de las peticiones que en su contra se formulan, por las razones que se esgrimen en los acápites de la oposición, hechos y razones de la defensa y fundamentos de las excepciones que se enuncian a continuación y se condene al demandante al pago de las costas incluyendo agencias en derecho en los términos del numeral 1 del artículo 365 y 366 del C.G.P. en aplicación analógica prevista por el Artículo 145 del C.P.T.S.S.

**A LA PRETENSION PRIMERO: ME OPONGO**, que se declare que la señora BARBARA ROCIO CALA ACEVEDO, fue inducida a grave error por parte de COLFONDOS S. APENSIONES Y CESANTÍAS, al haber omitido información completa veraz e imparcial sobre los beneficios, inconvenientes, consecuencias, y efectos relacionados con la decisión de su traslado al Régimen de Ahorro Individual, toda vez que la afiliación se realizó con plena voluntad de la cotizante, quien por decisión propia solicitó suscribir el formulario de afiliación a dicha AFP, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Sentencia C-1024 de 2004, y en la sentencia C-789 de 2002, basadas en el artículo 2 de Ley 797 de 2003 que modificó el literal "e" del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que nos habla de la



posibilidad de traslado de los aportes pensionales entre regímenes, expresando lo siguiente:

*"Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez"*

De acuerdo a lo anterior, es de precisar que la demandante, solicitó nulidad de traslado de régimen pensional a COLPENSIONES encontrándose afiliada al RAIS, tiempo para el cual se encontraba en la prohibición establecida en el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, por lo que solicitar el traslado entre regímenes en este momento es ilegal e improcedente, lo que imposibilita a mi representada reactivar la afiliación y aceptar el traslado de los aportes realizados por la demandante en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

Resulta inverosímil que la demandante, hubiese evidenciado las irregularidades en su traslado sin haber formulado duda o inquietud de la decisión tan importante que ello implicaba, y no fue sino hasta después de más de años de encontrarse afiliada y después de acreditar a menos de 10 años para acceder a la pensión de vejez, decida solicitar nuevamente el traslado de regímenes aduciendo engaño por parte de la AFP.

**A LA PRETENSION SEGUNDO: ME OPONGO,** que se declare ineficaz la afiliación de la señora BARBARA ROCIO CALA ACEVEDO, al fondo privado de pensión, toda vez que la afiliación se realizó con plena voluntad de la cotizante, quien por decisión propia solicitó suscribir el formulario de afiliación a dicha AFP, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Sentencia C-1024 de 2004, y en la sentencia C-789 de 2002, basadas en el artículo 2 de Ley 797 de 2003 que modificó el literal "e" del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que nos habla de la posibilidad de traslado de los aportes pensionales entre regímenes, expresando lo siguiente:

*"Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez"*

De acuerdo a lo anterior, es de precisar que la demandante, solicitó nulidad de traslado de régimen pensional a COLPENSIONES encontrándose afiliada al RAIS, tiempo para el cual se encontraba en la prohibición establecida en el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, por lo que solicitar el traslado entre regímenes en este momento es ilegal e improcedente, lo que imposibilita a mi representada reactivar la afiliación y aceptar el traslado de los aportes realizados por la demandante en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

Resulta inverosímil que la demandante, hubiese evidenciado las irregularidades en su traslado sin haber formulado duda o inquietud de la decisión tan importante que ello implicaba, y no fue sino hasta después de más de años de encontrarse afiliada y después



de acreditar a menos de 10 años para acceder a la pensión de vejez, decida solicitar nuevamente el traslado de regímenes aduciendo engaño por parte de la AFP.

**A LA PRETENSION TERCERA: ME OPONGO**, que como consecuencia de lo anterior, se declare vigente la afiliación de la señora BARBARA ROCIO CALA ACEVEDO al Régimen de Prima Media administrado por ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, sin solución de continuidad, toda vez que no procedería el traslado de régimen pensional de conformidad con el artículo 2º de la ley 797 de 2003, el cual modificó el literal E del artículo 13 de la ley 100 de 1993 el cual reza, "Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez".(negrilla y subrayado mío)

**A LA PRETENSION CUARTO: ME OPONGO**, Que se ordene a COLFONDOS S. A. PENSIONES Y CESANTÍAS, a comunicar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, la ineficacia de la afiliación a ese fondo de la señora BARBARA ROCIO CALA ACEVEDO toda vez que no procedería el traslado de régimen pensional de conformidad con el artículo 2º de la ley 797 de 2003, el cual modificó el literal E del artículo 13 de la ley 100 de 1993 el cual reza, "Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez".(negrilla y subrayado mío)

**A LA PRETENSION QUINTA: ME OPONGO**, que se ordene a COLFONDOS S. A. PENSIONES Y CESANTÍAS, a trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, la totalidad de los aportes cancelados desde el mes de mayo del año 1990, por la indebida afiliación de la señora BARBARA ROCIO CALA ACEVEDO incluir dentro del valor de los aportes a devolver a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, el ciento por ciento (100%) toda vez que la afiliación se realizó con plena voluntad de la cotizante, quien por decisión propia solicitó suscribir el formulario de afiliación a dicha AFP, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Sentencia C-1024 de 2004, y en la sentencia C-789 de 2002, basadas en el artículo 2 de Ley 797 de 2003 que modificó el literal "e" del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que nos habla de la posibilidad de traslado de los aportes pensionales entre regímenes, expresando lo siguiente:

*"Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez"*

De acuerdo a lo anterior, es de precisar que la demandante, solicitó nulidad de traslado de régimen pensional a COLPENSIONES encontrándose afiliada al RAIS, tiempo para el cual se encontraba en la prohibición establecida en el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, por lo que solicitar el traslado entre regímenes en este momento es ilegal e improcedente, lo que imposibilita a mi representada reactivar la afiliación y aceptar el traslado de los aportes realizados por la demandante en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

Resulta inverosímil que la demandante, hubiese evidenciado las irregularidades en su traslado sin haber formulado duda o inquietud de la decisión tan importante que ello implicaba, y no fue sino hasta después de más de años de encontrarse afiliada y después de acreditar a menos de 10 años para acceder a la pensión de vejez, decida solicitar nuevamente el traslado de regímenes aduciendo engaño por parte de la AFP.

**A LA PRETENSION SEXTA: ME OPONGO,** que se ordene a COLFONDOS S. A. PENSIONES Y CESANTÍAS, a de los aportes efectivamente cancelados a ese Fondo por la afiliación indebida, con los rendimientos que por ellos se han generados. toda vez que la afiliación se realizó con plena voluntad de la cotizante, quien por decisión propia solicitó suscribir el formulario de afiliación a dicha AFP, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Sentencia C-1024 de 2004, y en la sentencia C-789 de 2002, basadas en el artículo 2 de Ley 797 de 2003 que modificó el literal “e” del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que nos habla de la posibilidad de traslado de los aportes pensionales entre regímenes, expresando lo siguiente:

*"Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez"*

De acuerdo a lo anterior, es de precisar que la demandante, solicitó nulidad de traslado de régimen pensional a COLPENSIONES encontrándose afiliada al RAIS, tiempo para el cual se encontraba en la prohibición establecida en el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, por lo que solicitar el traslado entre regímenes en este momento es ilegal e improcedente, lo que imposibilita a mi representada reactivar la afiliación y aceptar el traslado de los aportes realizados por la demandante en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

Resulta inverosímil que la demandante, hubiese evidenciado las irregularidades en su traslado sin haber formulado duda o inquietud de la decisión tan importante que ello implicaba, y no fue sino hasta después de más de años de encontrarse afiliada y después de acreditar a menos de 10 años para acceder a la pensión de vejez, decida solicitar nuevamente el traslado de regímenes aduciendo engaño por parte de la AFP.

**A LA PRETENSION SEPTIMA: ME OPONGO,** que se ordene a COLFONDOS S. A. PENSIONES Y CESANTÍAS, a trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, la historia laboral de la señora BARBARA ROCIO CALA ACEVEDO por el tiempo que ha cotizado. toda vez que la afiliación se realizó con plena voluntad de la cotizante, quien por decisión propia solicitó suscribir el formulario de afiliación a dicha AFP, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Sentencia C-1024 de 2004, y en la sentencia C-789 de 2002, basadas en el artículo 2 de Ley 797 de 2003 que modificó el literal “e” del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que nos habla de la posibilidad de traslado de los aportes pensionales entre regímenes, expresando lo siguiente:

*"Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo*

*podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”*

De acuerdo a lo anterior, es de precisar que la demandante, solicitó nulidad de traslado de régimen pensional a COLPENSIONES encontrándose afiliada al RAIS, tiempo para el cual se encontraba en la prohibición establecida en el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, por lo que solicitar el traslado entre regímenes en este momento es ilegal e improcedente, lo que imposibilita a mi representada reactivar la afiliación y aceptar el traslado de los aportes realizados por la demandante en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

Resulta inverosímil que la demandante, hubiese evidenciado las irregularidades en su traslado sin haber formulado duda o inquietud de la decisión tan importante que ello implicaba, y no fue sino hasta después de más de años de encontrarse afiliada y después de acreditar a menos de 10 años para acceder a la pensión de vejez, decida solicitar nuevamente el traslado de regímenes aduciendo engaño por parte de la AFP.

**A LA PRETENSION OCTAVA: ME OPONGO**, que se ordene a ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, tener como afiliada sin solución de continuidad a la señora BARBARA ROCIO CALA ACEVEDO, toda vez que no procedería el traslado de régimen pensional de conformidad con el artículo 2º de la ley 797 de 2003, el cual modificó el literal E del artículo 13 de la ley 100 de 1993 el cual reza, “Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, **el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez**”.(negrilla y subrayado mío)

**A LA PRETENSION NOVENA: ME OPONGO**, que se condene a COLPENSIONES al pago de las costas, gastos, agencias procesales y demás sumas de dinero que resulten probadas dentro del proceso; en caso de oponerse a las pretensiones , toda vez que este fondo de pensiones, no es el causante de dicha declaración de Ineficacia del traslado por cuanto no intervino en la decisión de la demandante para realizar el traslado del RPM A RAIS , Colpensiones es un convidado por obligación y si bien es cierto se opuso administrativamente y en el proceso judicial ha sido con **fundamento en las normas legales vigentes** teniendo en cuenta que la entidad es de carácter público no puede apartarse de ellas

**A LA PRETENSION DECIMA: ME OPONGO**, que se condene a las demandadas a lo que ultra y extrapetita resulte probado en el proceso toda vez que en virtud del principio de consonancia afectaría pues en el campo de la controversia jurídica; no les es dado al juez ni a las partes modificar la causa pretendí a través del señalamiento extemporáneo de nuevos hechos, o a través de modificaciones a las pretensiones en oportunidades diferentes a las previstas legalmente, so pena de incurrir en vulneración de dicha garantía. E igualmente atendiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia plasmado en sentencia CSJ SL913 del 2013, donde manifestó que: “*dicha facultad extra petita no es absoluta y encuentra un límite entrantandose de prestaciones que no fueron objeto de la reclamación*

administrativa...<sup>2</sup>. Adicionalmente, mi representada, ha actuado en estricto cumplimiento del orden legal (artículo 2 de la ley 797 de 2003)

## **6. EXCEPCIONES PERENTORIAS**

### **6.1. APLICACIÓN DEL PRECEDENTE ESTABLECIDO EN LA SENTENCIA SL 373 DEL 2021.**

Propongo esta excepción, para que se tenga en cuenta la morigeración efectuada al precedente, claro en establecer que no procede la declaratoria de ineficacia y/o nulidad de traslado de régimen pensional, en los casos en que la parte demandante se trate de una persona que ya se encuentre pensionada en el régimen de ahorro individual en cualquiera de sus modalidades, situación equivalente a la devolución de saldos.

### **6.2. EL ERROR SOBRE UN PUNTO DE DERECHO NO VICIA EL CONSENTIMIENTO**

Encuentra vocación de prosperidad esta pretensión por cuanto el artículo 1509 de la codificación Civil manifiesta que el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento, y es claro que la demandante en los términos de los artículos 9 y 11 ibídem al trasladarse al RAIS tenía la obligación de conocer la ley 100 de 1993, pues dentro de este cuerpo normativo se establece de manera clara y precisa el funcionamiento de dicho régimen pensional así como también el de Prima Media con prestación definida, para que por su propio raciocinio tomara la decisión de permanecer afiliado al ISS o trasladar sus aportes, por lo tanto no puede decir que hubo un vicio del consentimiento, en especial cuando se trata de un supuesto ocultamiento de la información, pues si bien la H. Corte Constitucional ha indicado que las Administradoras de Fondo de Pensiones tienen el deber del buen consejo, lo cierto es que el afiliado o quien pretende ser afiliado no puede desconocer la norma ya citada pues la misma es obligatorio conocimiento para su aplicación y la demandante se escuda en un desconocimiento de la norma que los términos del artículo 9 del Código Civil no la exime de responsabilidad alguna tanto de sus derechos como de sus obligaciones.

### **6.3. PRESCRIPCIÓN:**

Sin que de ninguna manera se entienda reconocimiento de los hechos y pretensiones aducidas por la demandante, se propone esta excepción correspondiente a cualquier derecho que eventualmente se hubiese causado a favor de la demandante y que de conformidad con las normas legales y con las probanzas del juicio, quedaran cobijado por el fenómeno jurídico de la prescripción y la caducidad. Prescripción establecida en el art 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

### **6.4. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS:**

Las resoluciones o actos administrativos proferidos por la entidad que represento mediante los cuales resolvieron negativamente las solicitudes del accionante se encuentran amparadas legalmente con base en la documentación que reposa en la

<sup>2</sup> Sentencia SL 9576 del 13 de julio de 2016 Rad. 45897 acta 25 Mp Rigoberto Echeverri Bueno Pag 20 reiterada de la sentencia (CSJ SL8603-2015, CSJ SL Rad 50550 del 1 de julio de 2015 y SL 19452 del 13 de setiembre de 2017 MP GERARDO BOTERO ZULUAGA)

entidad, una vez llenos los requisitos para su formación adquieren fuerza obligatoria y gozan de presunción de legitimidad.

#### **6.5. COBRO DE LO NO DEBIDO:**

Por cuanto mi representada no adeuda derecho alguno al demandante por los conceptos aquí demandados, en razón a que la demandante no se encuentra afiliada al Régimen de prima media con prestación definida.

#### **6.6. BUENA FE:**

La entidad que represento siempre ha actuado dentro de los parámetros legales y Constitucionales, amparado en el principio de la Buena Fe tanto de esta entidad como de las entidades o personas que acuden a ella en calidad de usuarios o afiliados y en desarrollo de lo expresado en nuestra carta magna artículo 83 que indica que:

*"las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas".*

#### **6.7. INEXISTENCIA DEL DERECHO**

En razón que el traslado se realizó con plena voluntad del cotizante y en consecuencia no es procedente declarar la nulidad de la afiliación realizada por la accionante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y condenar a mi representada a recibir los aportes para activar la afiliación al régimen de prima media con prestación definida, teniendo en cuenta que por decisión propia solicitó su afiliación al RAIS, igualmente la actora se encuentra inmersa en la prohibición legal establecida en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 para trasladarse de régimen .

#### **6.8. INNOMINADA O GENÉRICA:**

Solicito al señor Juez que si encuentra probados hechos que constituyan una excepción, se sirva reconocerla de oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 del C.G.P aplicado por analogía según lo dispuesto por el artículo 145 del CPTSS.

### **7. NO PROCEDENCIA AL PAGO DE COSTAS EN INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ORDEN PÚBLICO**

Sin que de manera alguna pueda considerarse aceptación de los hechos y pretensiones de la demanda, se solicita al Despacho, que bajo los siguientes parámetros legales, que permiten al fallador de instancia abstenerse de esta condena por las razones y fundamentos de derecho que relaciono así:

En primer lugar, solicito la aplicación del Artículo 48 de la Constitución Política que prescribe:

*"Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.*



*Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.*

*El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.*

*La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.*

***No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.***

*La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.*

En este punto resalto el inciso 4 de este artículo en el que se refiere que no se podrán destinar los recursos de mí representada para fines diferentes a ella, por lo cual es dable interpretar, que el pago de Costas y agencias en derecho serian contrarios a esta preceptiva constitucional.

Ahora bien, el legislador en el artículo 365 del C.G.P en su numeral 5, otorgó a los jueces, la posibilidad de no imponer las costas procesales en casos en que prosperen parcialmente las pretensiones como se observa de la siguiente cita:

*"Artículo 365. Condena en costas.*

*En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:*

*(...)*

*En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión"*

Ahora bien, teniendo en cuenta la realidad de la jurisdicción ordinaria laboral, los procesos Ejecutivos en contra de mi representada, se basan en el pago de costas, por lo que, la no condena de estas evitaría la congestión judicial, salvaguardando principios de sostenibilidad financiera del sistema pensional, amparados bajo el principio de legalidad.

## **8. PETICIÓN ESPECIAL**

Sin el ánimo de aceptar alguno de los supuestos planteados en la demanda, solicito al despacho que de no acceder a los planteamientos de la defensa y ante la eventual declaratoria de nulidad y/o ineficacia y condena de aceptar la afiliación de la demandante en el régimen de prima media con prestación definida sin solución de continuidad, dicha condena este supeditada al traslado efectivo de la totalidad de valores consignados en la cuenta de ahorro individual con solidaridad de la demandante, así como los dineros destinados a seguros previsionales, gastos de administración, rendimientos, fondo de garantía de pensión mínima y fondo de solidaridad pensional de aplicar al caso de la **AFP COLFONDOS S.A., y cualquier otro fondo donde estuvo afiliada la demandante y que fueron suprimidos o fusionados con las AFP mencionadas.**

Lo anterior teniendo en cuenta que los derechos pensionales que pueda llegar a adquirir la demandante en el régimen de prima media con prestación definida, deben ser consecuencia del traslado efectivo de los aportes de la demandante a Colpensiones, pues de no ser así y de obligarse a la entidad que represento a reconocer cualquier tipo de derecho sin contarse con los aportes realizados por la demandante a la administradora en la que estuvo afiliada en el régimen de ahorro individual con solidaridad, generaría un impacto en el sistema financiero de Colpensiones, es por ello que solicito que de ser adverso a los intereses de mi representada, en el fallo se incluya la obligación de aceptar el traslado de la demandante una vez se haga el traslado efectivo de los aportes realizados en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

## **9. MEDIOS DE PRUEBA**

Solicito se tengan, decreten y practiquen como medios de prueba de las excepciones propuestas las siguientes:

### **9.1. DOCUMENTALES**

Copia del expediente administrativo de la parte demandante señora e historia laboral el cual se remite como archivos adjuntos anexos a la presente demanda debidamente nombrada.

### **9.2. INTERROGATORIO DE PARTE**

Solicito se cite a la parte demandante **BARBARA ROCIO CALA ACEVEDO**, para rendir interrogatorio de parte que formulare en la hora y fecha establecidas por su despacho, para probar la inexistencia de falta de información o configuración de vicios en el consentimiento.

### **9.3. OFICIOS O EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS**

**9.3.1. Conforme al artículo 265 del Código general del Proceso solicito se oficie o se ordene a la AFP COLFONDOS S.A. con el fin que exhiba y allegue las siguientes certificaciones:**

- 9.3.1.1.** Certificación donde se evidencie el total de los descuentos por concepto de gastos de administración realizados mes a mes de la cuenta de ahorro individual de la demandante durante su afiliación.
- 9.3.1.2.** Certificación donde se evidencien todos los contratos con su respectivo valor de los seguros provisionales realizados por la AFP con las aseguradoras, para cubrir las contingencias de invalidez, vejez y muerte y cualquier otro riesgo que generó durante su afiliación.
- 9.3.1.3.** Certificación donde se evidencia el valor del bono pensional si lo hubiere a favor de la parte actora durante su afiliación.
- 9.3.1.4.** Certificación donde se evidencie el total de los valores consignados mes a mes al fondo de garantía de pensión mínima durante su afiliación.



**9.3.1.5.** Certificación donde se evidencie el total de los valores consignados mes a mes al fondo de solidaridad pensional durante su afiliación.

**9.3.1.6.** Certificación donde se evidencia el valor de los rendimientos pensionales de la demandante mes a mes durante su afiliación.

Certificación donde se evidencia el valor de los rendimientos pensionales de la demandante mes a mes durante su afiliación.

Lo anterior con el fin de determinar los valores exactos que han sido descontados de la cuenta de ahorro individual del afiliado, poder tasar efectivamente la cuantía de la presente demanda, igualmente son necesarios en caso que se profiera sentencia condenatoria con el fin de tener exacta claridad de los valores que debe recibir mi representada y sobre ellos poder liquidar una posible indexación a favor de Colpensiones tal como se pide en el capítulo 8, petición especial, de la presente contestación.

De no ser así y de obligarse a la entidad que represento a reconocer cualquier tipo de derecho sin contarse con los aportes realizados por el demandante a la administradora en la que estuvo afiliado en el régimen de ahorro individual con solidaridad, generaría un impacto en el sistema financiero de Colpensiones.

#### **9.4. OTRAS PRUEBAS OFICIOSAS**

Las que el señor Juez considere decretar para obtener la certeza jurídica suficiente al momento de proferir Sentencia, para lo cual ruego se de aplicación al inciso final del artículo 170 del C.G.P, que reza:

*"Las pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las partes"*

#### **10. SOLICITUD CONDENA EN COSTAS**

Solicito al Señor Juez, en nombre de mi poderdante, que de ser negadas las pretensiones y condenas y probadas las excepciones de la demanda, la parte actora sea condenada al pago de las costas y agencias en derecho a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES conforme a lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso.

Además de lo anterior, en el evento de prosperar parcialmente las excepciones propuestas solicito respetuosamente tenga en cuenta al fallar, el numeral 5° del artículo 365 del Código General del Proceso, el cual expresa:

*"En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión."*

#### **11. ANEXOS**

**11.1.** Escritura pública N° 1186 del 17/05/2023 de la Notaría 02 del Circulo de Bogotá mediante la cual la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones le



otorga facultades de representación judicial a la firma Tabor Asesores Legales SAS, la cual se encuentra representada legalmente por la Abogada María Camila Ríos Oliveros.

- 11.2.** Sustitución de poder otorgada por la Doctora María Camila Ríos Oliveros para actuar en el proceso de la referencia.

## **12. NOTIFICACIONES**

La demandante en la dirección aportada al proceso.

Mi poderdante, en la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, carrera 10 No. 72 – 33 torre B piso 11 Bogotá y en el correo electrónico [notificaciones@taborabogados.com](mailto:notificaciones@taborabogados.com)

La suscrita apoderada judicial en la secretaria de su Despacho y en el correo electrónico [notificaciones@taborabogados.com](mailto:notificaciones@taborabogados.com); [azamudio@taborabogados.com](mailto:azamudio@taborabogados.com)

Del señor Juez,

Cordialmente,

AMANDA LUCIA ZAMUDIO VELA  
C.C. No. 51.713,048 de Bogotá  
T.P. No. 67.612 del C.S. de la J.

RP/ 2366  
RV/ ALZV

# República de Colombia

1

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NOTARÍA SEGUNDA (2ª) DE BOGOTÁ, D.C.

Código: 110010002

(Resolución 1626 de 2002, art. 2 S. N. y R.)

La veracidad de este documento puede ser  
verificada en la plataforma del VUR página  
[www.vur.gov.co](http://www.vur.gov.co) repositorio de poderes.  
Código de verificación: 1684524TT756  
Fecha: 19 MAY 2023



NOTARIA SEGUNDA  
DE BOGOTÁ D.C.

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: \_\_\_\_\_

MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS \_\_\_\_\_

DE FECHA: \_\_\_\_\_

DIECISIETE (17) DE MAYO \_\_\_\_\_

DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023). \_\_\_\_\_

OTORGADA EN LA NOTARÍA SEGUNDA (2ª) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ,  
DISTRITO CAPITAL. \_\_\_\_\_

CLASE DE ACTO: PODER GENERAL. \_\_\_\_\_

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO - IDENTIFICACIÓN

PODERDANTE: \_\_\_\_\_

PODERDANTE: \_\_\_\_\_

Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE. \_\_\_\_\_

NIT. \_\_\_\_\_ 900.336.004-7

APODERADO: \_\_\_\_\_

TABOR ASESORES LEGALES S.A.S. \_\_\_\_\_ NIT. 900.442.223-7

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), ante el despacho de la Notaría Segunda (2ª) del círculo de Bogotá D.C., cuyo Notario Encargado es **DANIEL JOSE MARTINEZ MARIÑO**, según Resolución No. 07267 del 23 de Junio de 2022 de la Superintendencia de Notariado y Registro, se otorga la presente escritura pública que se consigna en las siguientes cláusulas y

El presente documento es una copia de la escritura pública. No tiene costo para el usuario.

13-04-22 PC010522735

01/7KT9ZPG

PC078933223

08-02-23 PC078933223

IFA50WKXDQ

THOMAS GREG & SONS

términos.=====

**COMPARECENCIA:**

**COMPARECIERON CON MINUTA ESCRITA Y ENVIADA:=====**

Compareció **DIEGO ALEJANDRO URREGO ESCOBAR**, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificado con cédula de ciudadanía número CC 79.983.390 expedida en Bogotá D.C., de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, con domicilio y residencia en Bogotá D.C., en su condición de Representante Legal Suplente de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE, con NIT. 900.336.004-7**, calidad que acredita el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien manifestó que en aplicación de los artículos 440 y 832 del Código de Comercio; el artículo 2142 del Código Civil y la Circular básica Jurídica Capítulo III Título I Parte 1 de la Superintendencia Financiera de Colombia, confiere poder general, amplio y suficiente a **TABOR ASESORES LEGALES S.A.S. CON NIT 900.442.223-7**, en nombre y representación de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE, con NIT. 900.336.004-7**, en los siguientes términos:=====

**CLÁUSULA PRIMERA.** – Otorgo por el presente instrumento público **PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** a partir de la suscripción de la presente escritura a **TABOR ASESORES LEGALES S.A.S. CON NIT 900.442.223-7**, para que ejerza la representación judicial y extrajudicial, tendiente a la adecuada defensa de los intereses de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES**, ante las Autoridades Judiciales y el Ministerio Público, realizando todos los trámites, actos y demás gestiones requeridas en los procesos o procedimientos en los cuales la administradora intervenga como parte pasiva, y que se adelanten en cualquier lugar del territorio nacional; facultad esta que se ejercerá en todas las etapas procesales y diligencias que se requieran atender ante las mentadas autoridades, incluidas las audiencias de conciliación judicial y extrajudicial. El poder continuará vigente en caso de mi ausencia temporal o definitiva como Representante Legal Suplente de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE, con NIT. 900.336.004-7**, de conformidad con el inciso 6 del artículo 76 del Código General del Proceso, el cual establece que "*tampoco termina*



## República de Colombia

3

el poder por la cesación de las funciones de quien lo confirió como representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea revocado por quien corresponda." ==

**CLÁUSULA SEGUNDA.** – El representante legal de **TABOR ASESORES LEGALES S.A.S. CON NIT 900.442.223-7**, queda expresamente autorizado, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso, para sustituir el poder conferido dentro de los parámetros establecidos en el artículo 77 del Código General del Proceso, teniendo con ello facultad el apoderado sustituto para ejercer representación judicial y extrajudicial, de tal modo que en ningún caso la Entidad poderdante quede sin representación judicial y extrajudicial, y en general para que asuma la representación judicial y extrajudicial de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES** =====

La representación que se ejerza en las conciliaciones sólo podrá adelantarse con sujeción a las directrices del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES**, **CLÁUSULA TERCERA.** – Ni el representante legal de **TABOR ASESORES LEGALES S.A.S. CON NIT 900.442.223-7**, ni los abogados que actúen en su nombre podrán recibir sumas de dinero en efectivo o en consignaciones por ningún concepto. =====  
Queda expresamente prohibida la disposición de los derechos litigiosos de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES**, por parte del representante legal y de los abogados sustitutos que actúen en nombre de **TABOR ASESORES LEGALES S.A.S. CON NIT 900.442.223-7**, sin la autorización previa, escrita y expresa del representante legal principal o suplente de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES** y/o del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Colpensiones. =====

**CLÁUSULA CUARTA.** – Al representante legal y a los abogados sustitutos que actúen en nombre de **TABOR ASESORES LEGALES S.A.S. CON NIT 900.442.223-7**, les queda expresamente prohibido el recibo o retiro de las órdenes de pago de depósitos judiciales que se encuentren a favor de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES**, con NIT. 900.336.004-7. =====

**\*\* HASTA AQUÍ LA MINUTA ENVIADA Y ESCRITA \*\***

**ACEPTACIÓN NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS:** El (los) otorgante (s)

aparece notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PC010522736

12-04-22 PC010522736

VRCGBIEZSI

manifiesta (n) bajo la gravedad de juramento, que se entiende aceptado con la firma de la presente escritura pública, que SI da(n) su consentimiento para ser notificados por medio electrónico, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).====

**LOS COMPARECIENTES HACEN CONSTAR QUE:** 1. Han verificado cuidadosamente sus nombres y apellidos, números correctos de sus documentos de identificación, y aprueban este instrumento sin reserva alguna, en la forma como quedó redactado. 2. Las declaraciones consignadas en este instrumento corresponden a la verdad y los otorgantes lo aprueban totalmente, sin reserva alguna, en consecuencia, asumen la responsabilidad por cualquier inexactitud. 3. Conocen la Ley y saben que el Notario responde de la regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los otorgantes, ni de la autenticidad de los documentos que forman parte de este instrumento. 4. Que serán responsables civil, penal y fiscalmente, en caso de utilizarse esta escritura con fines ilegales. **ADVERTENCIA NOTARIAL:** A los otorgantes se les hizo la advertencia que una vez firmado este instrumento la Notaria no asumirá correcciones o modificaciones si no en la forma y casos previstos por la Ley, siendo esto solo responsabilidad de los otorgantes.

**OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN:** Leído el presente instrumento público por los comparecientes y advertidos de su formalidad, lo hallaron conforme con sus intenciones, lo aprobaron en todas sus partes y lo firmaron junto con el suscrito notario quien da fe y lo autoriza.=====

La presente escritura se elaboró en las hojas de papel notarial números: =====  
PO010522735 – PO010522736 – PO010522737 =====

Valor de los derechos Notariales:	\$74.900 =====
Superintendencia de Notariado y Registro:	\$7.950 =====
Cuenta Nacional del Notariado:	\$7.950 =====
I.V.A.	\$44.747 =====
Resolución 00387 de fecha 23 de enero de 2023 de la Superintendencia de Notariado y Registro =====	





**SNR** SUPERINTENDENCIA  
DE NOTARIADO  
& REGISTRO  
La garantía de la fe pública



MINISTERIO DE JUSTICIA Y  
DEL DERECHO

**ACTA DE REPARTO NOTARIAL**  
**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

Ordinario, Quinta Categoría

Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones  
poderesjudiciales@colpensiones.gov.co  
Carrera 10# 72-13 torre A

2023-05-09 09:58:58

00000409 - PODER POR ESCRITURA PUBLICA

LA MATRICULA NO ES REAL, DADO QUE PERTENECE A UN PODER GENERAL PARA REPRESENTACION  
LEGAL

Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones 900.326.004-7, Tabor Asesores Legales  
S.A.S., 900.442.223-7,  
poderesjudiciales@colpensiones.gov.co  
macamilarioso@gmail.com

9774

2023-05-09 10:23:36

SEGUNDA BOGOTA

Ordinario, Quinta Categoría

b7539549d89ffa2c36df164b64cd59b7

CUNDINAMARCA - BOGOTA

BOGOTA

0

0

50C-00000

TIPO DE REPARTO  
ENTIDAD OBLIGADA  
NOMBRE  
CORREO  
DIRECCION  
SOLICITUD  
FECHA  
ACTOS  
OBSERVACIONES  
INTERVINIENTES  
NOMBRE / CREDULA  
CORREO  
REPARTO  
ACTA DE REPARTO  
FECHA  
NOTARIA  
CATEGORIA DE REPARTO  
CASH  
DESCRIPCION  
DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
CANTIA  
CANTIDADES  
MATRICULAS

La anterior información fue generada por el Sistema Integrado de Servicios y Gestión de la Superintendencia de Notariado y Registro  
expide en Bogotá, D.C., a 2023-05-12

**CARLOS ENRIQUE MELENJE HURTADO**

Director de Administración Notarial

Verificar en sistema

[https://servicios.supernotariado.gov.co/pdf/acta\\_reparto/b7539549d89ffa2c36df164b64cd59b7.pdf](https://servicios.supernotariado.gov.co/pdf/acta_reparto/b7539549d89ffa2c36df164b64cd59b7.pdf)

Código:  
GDE - GD - FR - OB V.03  
28-01-2019

Superintendencia de Notariado y Registro  
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201  
PBX 57 + (1) 3292121  
Bogotá D.C. - Colombia  
<http://www.supernotariado.gov.co>  
[correspondencia@supernotariado.gov.co](mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co)

PC078933221

08-02-23 PC078933221

OEPOSIXU8

THOMAS GREG & SONS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

1960-1961

Copyright 1961



THE UNIVERSITY OF CHICAGO



La validez de este documento puede verificarse en la página [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) con el número de PIN

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 3773099661621916

Generado el 11 de mayo de 2023 a las 10:26:02

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

**EL SECRETARIO GENERAL**

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el artículo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del decreto 1848 de 2016.

**CERTIFICA**

**RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**

**NIT: 900336004-7**

**NATURALEZA JURÍDICA:** Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

**CONSTITUCIÓN Y REFORMAS:** Acuerdo No 2 del 01 de octubre de 2009. Se crea bajo la denominación ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES. Colpensiones, tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, se crea como una Empresa Industrial y comercial del Estado del orden nacional, vinculada al Ministerio de la Protección Social, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

Acuerdo No 9 del 22 de diciembre de 2011. La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo, con la finalidad de otorgar los derechos y beneficios establecidos por el sistema general de seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia.

Oficio No 2012082076 del 28 de septiembre de 2012. La Superintendencia Financiera de Colombia no encuentra objeción para que Colpensiones inicie operaciones como Administradora del Régimen de Prima Media con prestación definida.

Decreto No 2011 del 28 de septiembre de 2012. Artículo 1. Inicio de operaciones. A partir de la fecha de publicación del presente decreto, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones inicia operaciones como administradora de Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Artículo 2. Continuidad en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida de los afiliados y pensionados en Colpensiones. Los afiliados y pensionados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales (ISS), mantendrá su condición en la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, así como los derechos y obligaciones que tiene el mismo régimen. Los afiliados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom, mantendrán su condición, derechos y obligaciones que tienen, en el mismo régimen administrado por Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, sin que ello implique una selección o traslado de régimen de Sistema General de Pensiones. Artículo 5. Pensiones Causadas. Las pensiones de los afiliados a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom, causadas antes de la entrada en vigencia del presente decreto, serán reconocidas y pagadas por esta entidad, hasta tanto la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP y Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP), asuman dichas competencias.

**AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:** Decreto 2011 del 28 de septiembre de 2012

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.  
Commutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01  
[www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)

Página 1 de 4



MINISTERIO DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

PC078933220

ED95108L8M

08-02-23 PC078933220

THOMAS GREG & SONS



## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 3773099661621916

Generado el 11 de mayo de 2023 a las 10:26:02

### ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

**REPRESENTACIÓN LEGAL:** La administración de la Administradora Colombiana de Pensiones - (Colpensiones), está a cargo del Presidente, quien será su representante legal. PARÁGRAFO 1. El Presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), deberá cumplir con los requisitos de idoneidad exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las ausencias temporales o definitivas del Presidente serán suplidas por el Jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales, cualquiera de los Vicepresidentes o por el Gerente de Defensa Judicial de la entidad, siempre que cumplan con los requisitos del cargo. (Acuerdo 007 del 31 de agosto de 2021). **FUNCIONES DEL PRESIDENTE.** Son funciones del Despacho del Presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES, las siguientes: 1. Dirigir, coordinar, vigilar, controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, programas y proyectos inherentes al desarrollo del objeto de COLPENSIONES, directamente, a través de tercerización de procesos, mediante corresponsales o cualquier otro mecanismo que permita mayor eficiencia en la prestación del servicio, expidiendo los actos administrativos que se requieran para tal efecto. 2. Ejercer la representación legal de la Empresa. 3. Delegar o constituir apoderados, especiales para la representación judicial y/o administrativa de COLPENSIONES. 4. Dirigir la formulación y ejecución de políticas y estrategias relacionadas con el manejo de la información y la comunicación externa y organizacional. 5. Dirigir las políticas, programas, planes y proyectos para el relacionamiento con los diferentes grupos de interés de COLPENSIONES y el cumplimiento de los objetivos institucionales. 6. Dirigir la gestión comercial de la Empresa, que involucre el diseño de mercadeo, la divulgación y capacitación, la afiliación de nuevas personas y la administración y fidelización de quienes ya se encuentran afiliados. 7. Dirigir la gestión integral de servicio al cliente en caminata a la atención de los ciudadanos, empleadores, pensionados y demás grupos de interés que permitan satisfacer de forma efectiva, sus necesidades. 8. Impartir directrices para el diseño e implementación del Sistema de Administración Integral de Riesgos, de acuerdo a la normatividad legal vigente y someterlo a la aprobación de la Junta Directiva. 9. Dirigir las políticas que en materia de Gobierno Corporativo adopte COLPENSIONES. 10. Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva el proyecto anual de presupuesto, los proyectos de adición y traslados presupuestales, con arreglo a las disposiciones orgánicas y reglamentarias sobre la materia. 11. Presentar para aprobación de la Junta Directiva los estatutos de COLPENSIONES, sus modificaciones y las condiciones generales de carácter salarial y prestacional de los trabajadores oficiales de COLPENSIONES. 12. Presentar a consideración de la Junta Directiva y para aprobación del Gobierno Nacional, las modificaciones a la estructura y a la planta de personal de COLPENSIONES. 13. Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva los estados financieros y las operaciones de crédito de COLPENSIONES, de conformidad con las normas vigentes. 14. Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva el Código de Ética y Buen Gobierno, así como sus reformas o modificaciones, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y disponer lo pertinente para su conocimiento y aplicación al interior de COLPENSIONES. 15. Desarrollar y dirigir el cumplimiento de las decisiones y acuerdos de la Junta Directiva, ejecutarlas y rendir los informes que le sea solicitados. 16. Dirigir la ejecución presupuestal, comprometer y ordenar el gasto, suscribir los actos, y celebrar los contratos y convenios que se requieran para el normal funcionamiento de COLPENSIONES. 17. Nombrar y remover al personal de la Empresa que no corresponda a otra autoridad, dirigir los procesos de selección de personal, así como expedir los actos relacionados con la administración del mismo (tales como la distribución de personal, la suscripción y terminación de los contratos de trabajo, la expedición del manual de funciones y de competencias laborales y la creación o supresión de grupos internos de trabajo). La vinculación de los Vicepresidentes y los Jefes de Oficina de la Empresa deberá contar con la aprobación previa de la Junta Directiva. 18. Proponer para aprobación de la Junta Directiva, previo estudio técnico, la creación, supresión o fusión de Gerencias, Direcciones, Subdirecciones y Direcciones Regionales que se requieran para el cumplimiento de las funciones de la Empresa. 19. Crear, modificar o suprimir puntos de atención y corresponsales que se requiera para el cumplimiento del objeto social. 20. Recomendar a la Junta Directiva la aceptación de cesiones y subrogaciones con Empresas Públicas. 21. Presentar para aprobación de la Junta Directiva el manual de contratación, con sujeción a lo previsto en la Ley. 22. Ejercer la función de control disciplinario interno en los términos de la Ley 734 de 2002 o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 23. Dirigir las políticas para el fortalecimiento y mantenimiento de la cultura de autocontrol, y la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión Institucional. 24. Dirigir las políticas de control de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y demás actividades ilícitas, aprobadas por la Junta Directiva de Colpensiones que sean necesarias para el cumplimiento de la Empresa. 25. Rendir informes solicitados por las entidades de inspección, control y vigilancia y las demás autoridades a las cuales se les deba reportar información. 26. Las





La validez de este documento puede verificarse en la página [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) con el número de PIN

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 3773099661621916

Generado el 11 de mayo de 2023 a las 10:26:02

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

demás inherentes a la naturaleza de la dependencia, las establecidas por la Ley, los reglamentos o los estatutos. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Facultar al Presidente de COLPENSIONES por única vez, para escoger y contratar de los servidores públicos que hoy ocupan cargos de Vicepresidentes y Directores de Oficina Nacional en forma permanente, que surtieron los procesos de selección propios de la Administradora y que fueron aprobados por la Junta Directiva, para ocupar los cargos de Vicepresidentes y Jefes de Oficina. (Acuerdo 106 del 01 de marzo de 2017).

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Jaime Dussan Calderon Fecha de inicio del cargo: 26/01/2023	CC - 12102957	Presidente
Jorge Alberto Silva Acero Fecha de inicio del cargo: 14/12/2017	CC - 19459141	Suplente del Presidente (Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, con información radicada con el número 2019001331-000 del día 8 de enero de 2019, la entidad informa que con documento del 17 de diciembre de 2018 renunció al cargo de Suplente del Presidente y fue aceptada por la Junta Directiva en Acta 01-2019 del 11 de enero de 2019. Lo anterior de conformidad con los efectos establecidos por la Sentencia C-621 de julio 29 de 2003 de la Constitucional).
Javier Eduardo Guzmán Silva Fecha de inicio del cargo: 21/12/2018	CC - 79333752	Suplente del Presidente
Diego Alejandro Urrego Escobar Fecha de inicio del cargo: 10/02/2022	CC - 79983390	Suplente del Presidente
Oscar Eduardo Moreno Enriquez Fecha de inicio del cargo: 11/07/2019	CC - 12748173	Suplente del Presidente (Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, con información radicada con el número 2020289549-000 del día 1 de diciembre de 2020, que con documento del 12 de noviembre de 2020 renunció al cargo de Suplente del Presidente y fue aceptada por la Junta Directiva en Acta 019 del 12 de noviembre de 2020. Lo anterior de conformidad con los efectos establecidos por la Sentencia C-621 de julio 29 de 2003 de la Constitucional).
Maria Elisa Moron Baute Fecha de inicio del cargo: 21/03/2019	CC - 49790026	Suplente del Presidente

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.  
Conmutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01  
[www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)

Página 3 de 4



MINISTERIO DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO



PC078933219

08-02-23 PC078933219

W07MTV82PU

THOMAS GREG & SONS

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



TCOS



La validez de este documento puede verificarse en la página [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) con el número de PIN

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

**Certificado Generado con el Pin No: 3773099661621916**

Generado el 11 de mayo de 2023 a las 10:26:02

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**



**JOSUÉ OSWALDO BERNAL CAVEDES  
SECRETARIO GENERAL**

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.  
Conmutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01  
[www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)

Página 4 de 4



**MINISTERIO DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO**





Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16  
Recibo No. 2823067044  
Valor: \$ 7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2306704465425

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: TABOR ASESORES LEGALES SAS  
Nit: 900442323 7 Administración : Dirección Seccional  
De Impuestos De Bogotá, Régimen Común  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 02106183  
Fecha de matrícula: 7 de junio de 2011  
Último año renovado: 2022  
Fecha de renovación: 22 de marzo de 2023  
Grupo NIIF: Grupo III.

LA PERSONA JURÍDICA NO HA CUMPLIDO CON EL DEBER LEGAL DE RENOVAR SU MATRÍCULA MERCANTIL. POR TAL RAZÓN, LOS DATOS CORRESPONDEN A LA ÚLTIMA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL COMERCIANTE EN EL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y/O RENOVACIÓN DEL AÑO: 2022.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Calle 76 N 28 A 31  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: macamilarioso@gmail.com  
Teléfono comercial 1: 3006957607  
Teléfono comercial 2: 3004844662  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 76 N 28 A 31  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: macamilarioso@gmail.com  
Teléfono para notificación 1: 3006957607  
Teléfono para notificación 2: 3004844662  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16  
Recibo No. AB23067044  
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2306704465425

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 1 de junio de 2011 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 7 de junio de 2011, con el No. 01485654 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada MESA&PUERTO ABOGADOS SAS.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 010 del 5 de mayo de 2016 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de mayo de 2016, con el No. 02105975 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de MESA&PUERTO ABOGADOS SAS a CPH INVERSIONES SAS.

Por Acta No. 14 del 18 de marzo de 2019 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de marzo de 2019, con el No. 02436957 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de CPH INVERSIONES SAS a TABOR ASESORES LEGALES SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

La persona jurídica se disolvió y entró en estado de liquidación mediante Resolución No. 2022-01-181323 del 30 de marzo de 2022 de Superintendencia de Sociedades, inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de septiembre de 2022 con el No. 02877710 del Libro IX y por Acta No. 0014 del 30 de diciembre de 2022 de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de marzo de 2023 con el No.





Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16  
Recibo No. B23067044  
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2306704465425

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

02949400 del Libro IX, la persona jurídica de la referencia se reactivó.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal: Primero. La prestación de servicios jurídicos y de asistencia profesional en todas las áreas del derecho a la comunidad en general, sean personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras. En desarrollo de este objeto, la La Sociedad tendrá como objeto principal: Primero. La prestación de servicios jurídicos y de asistencia profesional en todas las áreas del derecho a la comunidad en general, sean personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras. En desarrollo de este objeto, la sociedad podrá A) ofrecer un servicio integral y especializado de asesoría, consultoría y representación en las áreas del derecho, contables, tributarias, sector inmobiliario, gestión empresarial, la asesoría integral a nivel empresarial y la representación judicial de personas jurídicas y naturales en litigios ordinarios y arbitrajes. B) Adquirir, usufructuar, gravar o limitar, representar, dar o tomar en arrendamiento a otro título toda clase de bienes muebles o inmuebles, celebrar todas las operaciones de crédito que le permitan obtenerlos fondos u otros activos necesarios para el desarrollo de la empresa, constituir sucursales y sociedades filiales nacionales y fuera del país para el establecimiento y explotación de empresas destinadas a la realización de cualquiera de las actividades comprendidas dentro del objeto social, C) Adquirir poseer y dar en arrendamiento o a título oneroso traslativo o no de dominio, equipos, instalaciones, máquinas, muebles u otros implementos o activos destinados a la dotación, funcionamiento y explotación de establecimientos que hagan relación con cualquier tipo de actividad lícita, D) La inversión en sociedades o empresas de cualquier naturaleza o especie de la sociedad mercantil E) Adquisición, posesión y exportación de patentes, nombres comerciales, marcas, secretos industriales, licencias u otros derechos constitutivos de propiedad industrial, conceder su exportación a terceros mediante licencia contractual o adquirir de ellos concesiones para su explotación directa o a través de otras sociedades. F) Transigir, desistir y someter a decisiones arbitrales sobre marcas, dibujos, insignias, patentes y conseguir registros de marcas, patentes y privilegios o cederlos a cualquier título. G) Adquirir como propietario o a cualquier otro título todo tipo de bienes, derechos

Página 3 de 9

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



PC078933217

08-02-23 PC078933217

A0WKBF6089

THOMAS GREG & SONS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16  
Recibo No. AB23067044  
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2306704465425

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

económicos o litigiosos, carteras de forma individual o de manera masiva. Enajenar toda clase de bienes o inmuebles, así como darlos o tomarlos en arrendamiento, pignorarlos o hipotecarlos según el caso. H) Adquirir o hacer toda clase de instalaciones industriales o comerciales relacionadas con el objeto social, tales como fábricas, talleres, almacenes de distribución o venta. I) Enajenar, arrendar, gravar y administrar en general los bienes que corresponden al patrimonio social. J) Contratar para sí o como codendor, préstamos, girar, endosar, descontar, toda clase de títulos valores y celebrar en general toda clase de operaciones relacionadas con títulos de crédito, civiles o comerciales que reclamen en desarrollo de los negocios sociales. K) Aportar sus bienes, en todo o en parte, a otra u otras sociedades en que le convenga vincularse para el mejor desarrollo de su negocio. L) Intermediar como agente, accionista, representante, consultora, corredora o factor y cualquier otra forma de mandato inherente con las actividades y operaciones relacionadas con sus negocios. M) Asesorar a personas naturales y jurídicas, nacionales o del exterior, en el manejo eficiente de recursos en materia económica, financiera, administrativa y comercial. En general, la sociedad podrá llevar a cabo cualquier tipo de actividad comercial o civil lícita, tales como las contempladas dentro del artículo 20 del Código de Comercio.

CAPITAL

\* CAPITAL AUTORIZADO \*

Valor	: \$200.000.000,00
No. de acciones	: 2.000,00
Valor nominal	: \$100.000,00

\* CAPITAL SUSCRITO \*

Valor	: \$1.000.000,00
No. de acciones	: 10,00
Valor nominal	: \$100.000,00

\* CAPITAL PAGADO \*

Valor	: \$1.000.000,00
No. de acciones	: 10,00





Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16  
Recibo No. B23067044  
Valor: \$ 7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2306704465425

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor nominal : \$100.000,00

### REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: La Sociedad tendrá un Gerente y será reemplazado en sus faltas absolutas, temporales o accidentales por un (1) suplentes, elegidos por la Asamblea de Accionistas para periodos de un (1) año, reelegibles indefinidamente y removibles en cualquier tiempo. El Gerente será el Representante Legal de la sociedad y tendrá a su cargo la dirección y administración de los negocios sociales.

### FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: El Gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo como representante legal y en especial: A. Ejecutar o hacer ejecutar las resoluciones de la asamblea general. B. Ejecutar las operaciones en que la sociedad haya de ocuparse para el cumplimiento del objeto social sujetándose a los estatutos y las resoluciones de la Asamblea General de Accionistas. C. Representar a la sociedad ante terceros, judicial y extrajudicialmente y autorizar con su firma los actos y contratos en que ella intervenga. D. Constituir apoderados que representen a la sociedad judicial o extrajudicialmente. E. Servir de consultor y asesor en la asamblea de accionistas en todas las actividades de la sociedad. F. Celebrar los actos y contratos que tiendan a cumplir los fines sociales sin límite de cuantía. G. Orientar de acuerdo con las decisiones de la asamblea de accionistas todas las actividades de la sociedad. H. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a sesiones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o cuando un número plural de acciones que represente por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito le solicite que convoque a asamblea general. I. Dentro de la delegación que le haga la asamblea de accionistas, organizar lo relativo a la administración del personal, vigilar la actividad de los empleados de la sociedad e impartir las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. J. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, las cuentas, inventarios y el balance general de cada ejercicio para su aprobación o aprobación acompañado del detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias del correspondiente ejercicio social, lo mismo que un

Página 5 de 9



Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16  
Recibo No. AB23067044  
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2306704465425

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

proyecto de distribuciones de utilidades repartibles y los demás datos que exige la ley. K. Presentar balances y un informe sobre la marcha de los negocios con la periodicidad que le indique la asamblea de accionistas. L. Presentar a la Asamblea General de Accionistas un proyecto de apropiación de las reservas que ordenan las disposiciones legales. M. Cuidar de la recaudación de los fondos sociales. N. Informar a la Asamblea General de Accionistas sobre las operaciones de la sociedad y presentarle detalladamente los informes que ésta solicite. O. Cumplir y hacer cumplir que se cumplan oportunamente todas las resoluciones de la asamblea general como los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad y p. Todas las demás funciones que señalen la ley, los estatutos o le delegue la Asamblea de Accionistas.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 0014 del 30 de diciembre de 2022, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de marzo de 2023 con el No. 02949425 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Maria Camila Rios Oliveros	C.C. No. 1026275391

Por Acta No. 13 del 18 de marzo de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de marzo de 2019 con el No. 02436685 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Gerente	Del Paola Fernanda Ayala Salamanca	C.C. No. 1151937659

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:





Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16  
Recibo No. AB23067044  
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2306704465425

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 007 del 9 de julio de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02003197 del 16 de julio de 2015 del Libro IX
Acta No. 010 del 5 de mayo de 2016 de la Accionista Único	02105975 del 23 de mayo de 2016 del Libro IX
Acta No. 14 del 18 de marzo de 2019 de la Accionista Único	02436957 del 19 de marzo de 2019 del Libro IX
Acta No. 0014 del 30 de diciembre de 2022 de la Accionista Único	02949400 del 27 de marzo de 2023 del Libro IX

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 6201  
Actividad secundaria Código CIIU: 6910  
Otras actividades Código CIIU: 6810

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño

Página 7 de 9



Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16  
Recibo No. AB23067044  
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2306704465425

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 0

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIU : 6910

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 13 de junio de 2011. Fecha de envío de información a Planeación : 29 de marzo de 2023. An An Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.



Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de mayo de 2023 Hora: 11:43:16  
Recibo No. AB23067044  
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2306704465425

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

  
CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



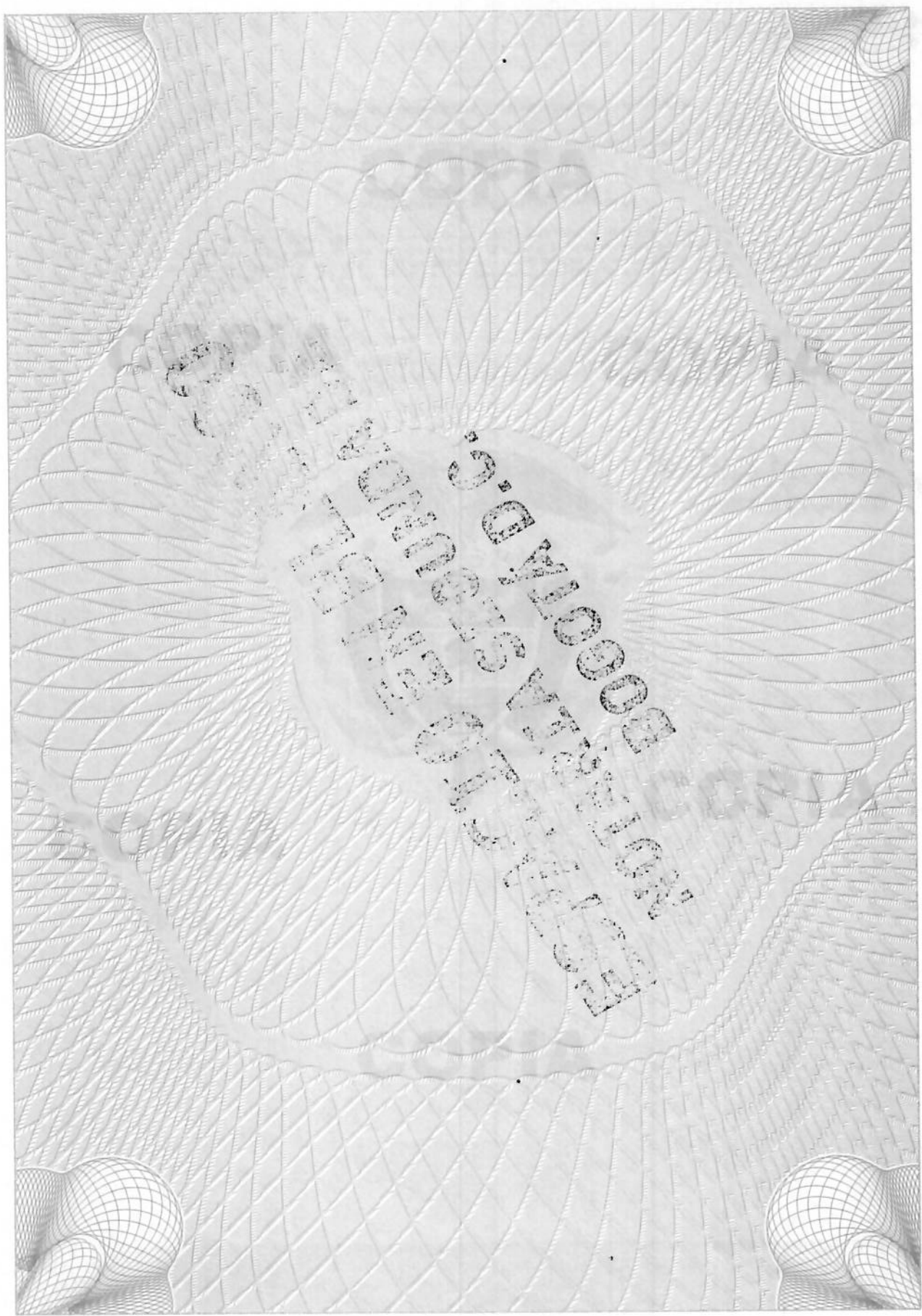
PC078933214

08-02-23 PC078933214

2LHPCUJA1G

THOMAS GREG & SONS





THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILLINOIS

1998

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILLINOIS



DIAN  
POR UNA COLOMBIA MÁS PROGRESIVA

# Formulario del Registro Único Tributario

001

2 Concepto 02 Actualización

4 Número de formulario

14909433611



(415)7707212469984(8020) 0000014909433611

5 Número de Identificación Tributaria (RUT)

6 DV

12 Dirección seccional

9 0 0 4 4 2 2 2 3

7 Impuestos de Bogotá

3 2

14 Buzón electrónico

## IDENTIFICACIÓN

23 Tipo de contribuyente

Pers. jurídica

25 Tipo de documento

1

26 Número de identificación

27 Fecha expedición

28 País

26 País

29 Departamento

30 Ciudad/Municipio

31 Primer apellido

32 Segundo apellido

33 Primer nombre

34 Otros nombres

35 Razón social

BOIR ASESORES LEGALES SAS

36 Nombre comercial

37 Slogan

## UBICACIÓN

38 País

COLOMBIA

1 6 9

39 Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40 Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41 Dirección principal

CL 7 NORTE 28A 31

42 Correo electrónico

admon.taboradores@gmail.com

43 Código postal

44 Teléfono 1

3 0 0 6 9 5 7 6 0 7

45 Teléfono 2

3 0 0 4 8 4 4 6 6 2

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

46 Código

0 1

47 Fecha inicio actividad

2 0 1 6 0 3 3 0

48 Código

0 9 1 0

49 Fecha inicio actividad

2 0 1 6 0 5 0 5

50 Código

0 8 1 0

51 Código

52 Número establecimiento

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53 Código

5 7 9 1 4 2 4 8 5 2 5 5

54 Tipo de renta y compl. régimen ordinario

55 Informante de Beneficiarios Finales

56 Retención en la fuente a título de rent

57 Retención en la fuente en el impuesto

58 Informante de exógena

59 Obligado a llevar contabilidad

60 Impuesto sobre las ventas - IVA

61 Declarador electrónico

### Obligados aduaneros

### Exportadores

54 Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55 Forma

56 Tipo

Servicio

1

2

3

57 Modo

58 CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario .RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

### Para uso exclusivo de la DIAN

59 Anexos

SI

NO

60 No de Folios

1 1

61 Fecha

2023-04-19/ 11:40:21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos correspondientes o de suspensión, según el caso.

Reglamento del artículo 1 y 1.2.2 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada

584 Nombre

DURAN GUEVARA CAROLINA

585 Cargo

Gestor I

Fecha generación documento PDF: 05-05-2023 09:32:16AM

PC078933213

08-02-23 PC078933213

GJPD1Q8560

THOMAS GREG & ASSOC.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14909433611



(415) 7707212489984(8020) 0000014909433611

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos de Renta

14. Buzón electrónico

9 0 0 4 4 2 2 2 3 7

3 2

## Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental,

municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos

extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

## Constitución, Registro y Última Reforma

## Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

0 1

73. Fecha

2 0 1 1 0 6 0 1

0 0 1 4

74. Número de notaría

2 0 2 2 1 2 3 0

75. Entidad de registro

0 3

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 1 0 6 0 7

2 0 2 3 0 3 2 7

77. No. Matricula mercantil

0 2 1 0 6 1 8 3

0 2 1 0 6 1 8 3

78. Departamento

1 1

1 1

79. Ciudad/Municipio

4

4

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional pública

0 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 0 %

87. Extranjero privado

0 0 %

Vigencia

80. Desde

2 0 1 1 0 6 0 1

81. Hasta

2 0 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

## Estado y Beneficio

Item

89. Estado actual

90. Fecha cambio de estado

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)

92. DV

1

8 1

2 0 1 5 0 1 0 1

2

3

4

5

## Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante

96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria  
cargado en el exterior

171. País

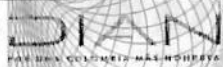
172. Número de identificación tributaria  
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP





PC078933212



Formulario del Registro Único Tributario  
Revisor Fiscal y Contador

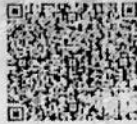
001

Página 4 de 4 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14909433611



(415)7707212489984(8020) 0000014009433611

5. Número de Identificación Tributaria (RIT)

9 0 0 4 4 2 2 3 7

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

3 2

11. Emisión electrónica

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
132. Número de Identificación Tributaria (RIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
135. Fecha de nombramiento			

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (RIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento			

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 9 1 1 1 0 7 1		2 1 3 4 3 4 T
152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ALVAREZ	REYES	MARITZA	ANTONIO
156. Número de Identificación Tributaria (RIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento	2 0 2 3 0 4 0 1		



República de Colombia

5

ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:

MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS

DE FECHA:

DIECISIETE (17) DE MAYO

DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023), OTORGADA EN LA NOTARÍA SEGUNDA  
(2a.) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

DIEGO ALEJANDRO URREGO ESCOBAR

C.C.No. 79983390

TEL o CEL. 3004919939

DIR. Carrera 15 # 170-81

CIUDAD: Bogotá

E-MAIL. dalegorego@colpensiones.gov.co

PROFESIÓN U OFICIO: Abogado

OBRA en su condición de Representante Legal Suplente de la Administradora  
Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE, con NIT. 900.336.004-7

DANIEL JOSE MARTINEZ MARIÑO

NOTARIO SEGUNDO (2º) ENCARGADO DE BOGOTÁ, D.C.



PB  
RAD1244

N2

NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.  
Leovedis Elías Martínez Durán  
Notario



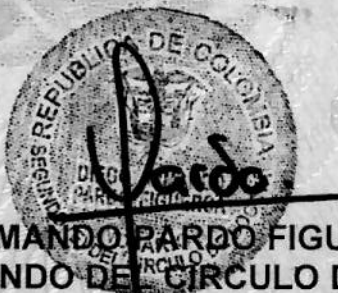
HACE CONSTAR

QUE EL PODER CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA 1186 DE FECHA DIECISIETE (17) DE MAYO DEL AÑO 2023 CUYA PRESENTE COPIA ES FIEL Y EXACTA A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE PROTOCOLO.

QUE A LA FECHA SE PRESUME VIGENTE CON LAS FACULTADES A EL INHERENTES, POR CUANTO EN EL ORIGINAL DEL INSTRUMENTO CITADO, NO FIGURA NOTA ALGUNA DE REVOCATORIA, MODIFICACIÓN, CANCELACIÓN O ACLARACIÓN, NI LIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES Y EN GENERAL NINGUNA SITUACIÓN QUE LA AFECTE EN ALGÚN SENTIDO

ES LA COPIA NÚMERO DOS (02) EXPEDIDA EN CATORCE (05) HOJAS ÚTILES CON DESTINO AL INTERESADO.

DADA EN BOGOTÁ D.C. EL DÍA DIECINUEVE (19) DE MAYO DEL AÑO 2023.



**DIEGO ARMANDO PARDO FIGUEROA**  
**NOTARIO SEGUNDO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ**  
**(ENCARGADO)**

**NOTA.** Cualquier cambio o modificación que se realice sobre estas copias sin la autorización e intervención del notario conforme a la ley es ilegal y utilizarlas puede causar sanción penal.

Carrera 13 No. 64-29  
[www.notaria2bogota.com](http://www.notaria2bogota.com)  
PBX 3000861



PC078933210

08-02-23 PC078933210

7EF8XL2PT5

THOMAS GREG & SONS





203290

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

67612-D2

Tarjeta No.

28/02/1994

Fecha de  
Expedicion

23/07/1993

Fecha de  
Grado

AMANDA LUCIA

ZAMUDIO VELA

51713048

Cedula

CUNDINAMARCA

Consejo Seccional

NUEVA GRANADA

Universidad

*Amador Oval*  
Presidente Consejo Superior  
de la Judicatura



*Zamudio*

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO

51.713.048

ZAMUDIO VELA

APELLIDOS

AMANDA LUCIA

NOMBRES

*Amanda Lucia Zamudio Vela*  
FIRMA

